



**AMPARO EN REVISION NUMERO 2205/97.
QUEJOSA: INDUSTRIA MEXICANA DEL
ALUMINIO, S.A. DE C.V.**

**PONENTE: MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.
SECRETARIO: ARMANDO CORTES GALVAN.**

Vo.Bo.
MINISTRO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

VISTO, para resolver el toca número 2205/97, relativo al
recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República
en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito
en el Estado de México, en el juicio de amparo número 150/97;

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el diez de marzo de mil
novecientos noventa y siete, ante el Secretario del Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en
Naucalpan de Juárez, la empresa denominada Industria
Mexicana del Aluminio, sociedad anónima de capital variable, por
conducto de su apoderado José Luis Fernando Guerrero
Córdova, demandó el amparo y la protección de la Justicia
Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se
indican a continuación:

"IV. AUTORIDADES RESPONSABLES:

- "a) El H. Congreso de la Unión;**
- "b) C. Presidente de la República;**
- "c) C. Secretario de Gobernación;**
- "d) C. Secretario de Hacienda y Crédito Público;**
- "e) C. Director del Diario Oficial de la Federación,**
"dependiente de la Secretaría de Gobernación;
- "f) C. Tesorero de la Federación, dependiente de la**
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- "g) C. Administrador General de Recaudación,**
"dependiente de la propia Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público; y
- "h) C. Administrador Local de Recaudación de**
"Naucalpan, dependiente de la Secretaría de
"Hacienda y Crédito Público.

"V. ACTOS RECLAMADOS:

- "a) Del H. CONGRESO DE LA UNION, se reclama la**
"expedición de la Ley del Impuesto al Activo,
"publicada en el Diario Oficial de la Federación de
"fecha 31 de diciembre de 1988, así como sus
"reformas contenidas en los decretos publicados
"en el propio Diario los días 28 de diciembre de
"1989, 26 de diciembre de 1990, 20 de diciembre de
"1991, 20 de julio de 1992, 3 de diciembre de 1993,
"20 de diciembre de 1994, 10 de mayo de 1996 y 30
"de diciembre de 1996.
- "b) Del C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se**
"reclama la expedición del Reglamento de la Ley
"del Impuesto al Activo, publicado en el Diario
"Oficial de la Federación del 30 de marzo de 1989,
"así como de sus reformas publicadas en ese

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEMER



"mismo órgano de difusión los días 7 de junio de
"1989, 15 de mayo de 1990, 31 de marzo y 5 de
"noviembre de 1992 y 4 de octubre de 1993.

"c) Del C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se
"reclama la expedición del Decreto por el que se
"otorgan estímulos fiscales en diversas
"contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la
"Federación de fecha 24 de diciembre de 1996, por
"cuanto en su artículo 1º se establece la excepción
"total del pago del impuesto del activo que se
"cause durante el ejercicio de 1997, a los
"contribuyentes cuyos ingresos para efectos de la
"Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de
"1996 no hubiese excedido de \$8,900,000.00.

"d) Del C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se
"reclama la promulgación y orden de publicación
"del ordenamiento legal mencionado en el inciso a)
"que antecede, así como la orden de publicación
"del Reglamento y del Decreto señalados en los
"incisos b) y c) anteriores.

"e) De los CC. SECRETARIO DE HACIENDA Y
"CREDITO PUBLICO Y SECRETARIO DE
"GOBERNACION, se reclama el refrendo de los
"ordenamientos legales citados en los puntos a) y
"b) que anteceden.

"f) Del C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO
"PUBLICO, se reclama el refrendo del Decreto
"señalado en el punto c) anterior.

"g) De los CC. SECRETARIO DE GOBERNACION y
"DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA

**"FEDERACION, se reclama la publicación de los
"ordenamientos legales citados en los puntos a), b)
"y c) que anteceden.**

**"h) De los CC. SECRETARIO DE HACIENDA Y
"CREDITO PUBLICO, TESORERO DE LA
"FEDERACION, ADMINISTRADOR GENERAL DE
"RECAUDACION Y ADMINISTRADOR LOCAL DE
"RECAUDACION DE NAUCALPAN, se reclama el
"primer acto de aplicación de los ordenamientos
"legales reclamados de inconstitucionales,
"consistente en la recepción de la primera
"declaración provisional del impuesto al activo que
"por el mes de enero de 1997, fue presentada ante
"Banamex, S.A. por la empresa quejosa el día 17 de
"febrero de 1997."**

ESTADO UNIDO
SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes:

**"1. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 31
"de diciembre de 1988 fue publicada la Ley del
"Impuesto al Activo, misma que fue reformada por
"diversos Decretos publicados en ese mismo
"Diario los días 28 de diciembre de 1989, 26 de
"diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 20 de
"julio de 1992, 3 de diciembre de 1993, 28 de
"diciembre de 1994, 10 de mayo de 1996 y 30 de
"diciembre de 1996.**

**"2. El día 30 de marzo de 1989, fue publicado en el
"Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la**



"Ley del Impuesto al Activo, mismo que ha sido
"reformado mediante decretos publicados en el
"propio órgano de difusión de fechas 7 de junio de
"1989, 15 de mayo de 1990, 31 de marzo y 5 de
"noviembre de 1992 y 4 de octubre de 1993.

"3. El día 24 de diciembre de 1996, fue publicado en
"el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
"que se otorgan estímulos fiscales en diversas
"contribuciones, que en su artículo 1º establece
"que se exime totalmente del pago del impuesto al
"activo que se cause durante el ejercicio de 1997 a
"los contribuyentes cuyos ingresos para efectos de
"la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio
"de 1996, no excedan de \$8'900,000.00.

COPIA DE LA DECISION.
"4. Con fecha 17 de febrero de 1997, la ahora
"quejosa presentó ante Banamex, S.A. la primera
"declaración provisional del impuesto al activo
"correspondiente al mes de enero de 1997,
"circunstancia que, al parecer de la empresa
"reclamante constituye el primer acto de aplicación
"de la ley, del Reglamento y del Decreto cuya
"inconstitucionalidad se reclama por conducto de
"la presente demanda de garantías, no obstante de
"que en ejercicios anteriores ella había estado
"cumpliendo con las obligaciones fiscales a su
"cargo en materia de la propia contribución
"conforme al sistema vigente hasta el 31 de
"diciembre de 1996.

"5. Es importante señalar que durante el ejercicio
"fiscal de 1996, mi representada obtuvo ingresos

**"para efectos del impuesto sobre la renta, mayores
"a \$8'900.000.00, tal como se acredita en la
"declaración anual presentada por la ahora
"quejosa.**

**"6. Los ordenamientos legales que han quedado
"señalados como reclamados en el capítulo
"correspondiente del presente ocurso son
"violatorios de diversas garantías individuales en
"perjuicio de la ahora peticionante, por lo que viene
"a solicitar el amparo y protección de la Justicia de
"la Unión contra dichos actos y sus efectos."**

TERCERO. A su vez, la quejosa invocó como garantías violadas en su perjuicio las contenidas en los artículos 1°, 13, 14, 16, 28, párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y como conceptos de violación, los que dicen:

**"PRIMERO. La Ley del Impuesto al Activo, su
"Reglamento y el artículo primero del Decreto
"publicado en el Diario Oficial de la Federación del
"24 de diciembre de 1996 son, a su vez, violatorios
"de las garantías de igualdad y equidad que
"consagran los artículos 1°, 13 y 31, fracción IV, de
"la Constitución Política del País, que establecen,
"respectivamente, lo siguiente: "En los Estados
"Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
"garantías que otorga esta Constitución, las cuales
"no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en
"los casos y con las condiciones que ella misma
"establece"; que: "Nadie puede ser juzgado por**



"leyes privativas ni por tribunales especiales"; y
"que: "Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV.
"Contribuir para los gastos públicos, así de la
"Federación, como del Estado y Municipio en que
"residan, de la manera proporcional y equitativa
"que dispongan las leyes."

"Las garantías de igualdad y equidad aludidas se
"traducen en que varias personas, en número
"indeterminado, que se encuentren en una
"específica situación, tengan la posibilidad y
"capacidad de ser titulares, cualitativamente, de los
"mismos derechos y contar con las mismas
"obligaciones que emanen de dicho Estado. Es
"decir, la igualdad y la equidad entre los sujetos de
"derecho se manifiesta en la posibilidad y en la
"capacidad de que varias personas,
"numéricamente indeterminadas, adquieran en
"similares términos los derechos y contraigan las
"obligaciones derivadas del exacto estado en que
"se hallan. Por ende, no puede considerarse que
"existe una relación igualitaria entre la posición
"concreta que guardan personas colocadas en una
"misma situación jurídica, cuando el poder público,
"para los mismos supuestos, les concede a cada
"una un trato diferente. Por ello, la igualdad y la
"equidad entre los sujetos es el conjunto de
"posibilidades y capacidades que les son
"imputables, para que estén en aptitud de adquirir
"idénticos derechos y obligaciones desde un punto
"de vista cualitativo, que corresponden a otras



"personas colocadas en la misma situación
 "jurídica, lo que desde el ángulo constitucional se
 "traduce en una concepción eminentemente
 "negativa, consistente en la ausencia de
 "distinciones entre los individuos que se
 "encuentran en un mismo plano de igualdad. El
 "campo en el que opera la igualdad y equidad es
 "muy amplio, pues no se establece ni se demarca
 "por un cierto factor contingente o accesorio, sino
 "que se forma por un fenómeno negativo inherente
 "a los sujetos en sí considerados, para que no haya
 "diferencias en las posibilidades y en las
 "capacidades jurídicas generales, debidas a
 "particularidades que puedan ostentar varias
 "personas.

STAMP
 SUPLENTE
 JUSTICIA DE
 SECRETARÍA GENERAL

"Por tratarse de una garantía constitucional, el
 "gobierno tiene el derecho o potestad jurídica de
 "exigir al Estado y a sus órganos, el respeto de esa
 "situación en que se traduce la igualdad y la
 "equidad. El propio Estado y sus órganos tienen la
 "obligación de reputar a los particulares en su
 "totalidad en un mismo plano, sin atribuir
 "distinciones y diferencias en base a elementos
 "contingentes.

"En lo que concierne a las relaciones
 "jurídico-tributarias, los anteriores argumentos se
 "encuentran ratificados en la jurisprudencia de la
 "H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que a
 "continuación se transcribe:



**"EQUIDAD Y GENERALIDAD EN MATERIA
"JURIDICO FISCAL." (transcribe).**

**"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
"1917-1988, Primera Parte, página 703.**

**"Es así, de acuerdo con las disposiciones
"constitucionales transcritas al inicio de este
"apartado y con la interpretación que sobre el
"particular ha elaborado nuestro Máximo Tribunal,
"como se concluye que la equidad y la igualdad en
"materia impositiva presuponen y persiguen,
"concomitantemente, el mismo tratamiento a todas
"las personas obligadas al pago de una
"contribución, cuando se encuentren en idénticas
"situaciones jurídicas o de hecho, para que con
"ello se conceda un trato igual a los iguales y
"desigual a los desiguales. En consecuencia, los
"gravámenes que no respeten los principios de
"igualdad y de equidad no podrán tenerse por
"válidos, desde una perspectiva constitucional, al
"atribuir el mismo tratamiento a los desiguales o
"diferente a los iguales.**

**"Ahora bien, la Inconstitucionalidad de la Ley del
"Impuesto al Activo, su Reglamento y del artículo
"primero del Decreto publicado en el Diario Oficial
"de la Federación de fecha 24 de diciembre de
"1996, se configura al momento en que se
"implantan similitudes y paridades en el
"tratamiento fiscal de sujetos que se encuentran en
"diferentes situaciones jurídicas y de hecho, a la
"vez que, en forma por demás paradójica, también**

OS MEXICANOS
CORTES DE
LA NACION
DE ACUERDO

"establece diferenciaciones entre contribuyentes
 "que guardan igualdad legal y fáctica indudable,
 "todo ello en franca contradicción de los artículos
 "1º, 13 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, en los
 "términos que a continuación se acreditan:

"a) En segundo término, la contribución federal
 "reclamada de inconstitucional por conducto del
 "presente libelo es violatoria en perjuicio de mis
 "poderdantes de los artículos 1º, 13 y 31, fracción
 "IV, de la Constitución Federal, en razón del
 "tratamiento diferenciado e inequitativo que a partir
 "del 1º de enero de 1997 se ha introducido a través
 "del Decreto por el que se otorgan estímulos
 "fiscales en diversas contribuciones, publicado en
 "el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de
 "diciembre de 1997, cuando en su artículo 1º se
 "establece la exención total del pago del impuesto
 "al activo que se cause durante el ejercicio de 1997
 "a los contribuyentes cuyos ingresos no hubiesen
 "excedido de \$8'900.000.00 para efectos de la Ley
 "del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de
 "1996.

"En efecto atendiendo a las garantías de igualdad y
 "equidad en el pago de los tributos es innegable
 "que el sistema de causación y pago del impuesto
 "al activo vigente durante el año de 1996,
 "modificado substancialmente a través del Decreto
 "antes señalado, no tiene un sustento
 "constitucionalmente válido que lo soporte, ya que
 "no existe una justificación razonable y objetiva



que haya permitido el establecimiento de la
"exención de que se trata sobre la base arbitraria y
"caprichosa de los ingresos obtenidos por los
"contribuyentes en materia del impuesto sobre la
"renta, en función de los cuales algunos de esos
"contribuyentes quedarán eximidos del pago del
"impuesto al activo, mientras que otros no, a pesar
"de que todos ellos tienen activos en su patrimonio
"que, en igualdad de condiciones, desde el punto
"de vista constitucional deberían estar gravados (o
"exentos) con este último impuesto.

Así pues, el hecho de que en el artículo primero
"del Decreto por el que se otorgan estímulos
"fiscales en diversas contribuciones, publicado en
"el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de
"diciembre de 1996, se haya establecido una
"exención adicional a las consignadas en el
"artículo 6° de la Ley del Impuesto al Activo, sobre
"el arbitrario criterio de ingresos obtenidos en el
"impuesto sobre la renta (que no excedan de
"\$8'900,000.00), ocasiona la inconstitucionalidad de
"dicha ley, de su Reglamento y del Decreto antes
"mencionado, pues conforme a los artículos 1°, 13
"y 31, fracción IV, de la Carta Magna, lo cierto es
"que todos los contribuyentes, sin excepción
"alguna, debieran estar obligados al pago de la
"contribución impugnada por conducto del
"presente libelo, por lo que si en tal Decreto de
"manera injustificada se ha exentado a los
"contribuyentes que en el ejercicio de 1996

"obtuvieron ingresos en el impuesto sobre la renta
 "que no excedieron de la cantidad de \$8'900,000.00
 "es entonces evidente el nuevo concepto de
 "inequidad que a partir del 1º de enero de 1997 se
 "ha instituido en materia del impuesto al activo,
 "toda vez que, se insiste, la forma en que opera la
 "exención de que se trata es francamente arbitraria
 "y caprichosa, y carece, por ello, de elementos
 "racionales y objetivos que la justifiquen, puesto
 "que desde el ángulo constitucional es inaceptable
 "que un contribuyente que no haya percibido
 "ingresos superiores a dicho monto, esté exento
 "del pago de dicho impuesto, en tanto que los
 "demás contribuyentes sí estén obligados a
 "pagarlo, no obstante que unos y otros <sup>SE
SECRETARIA 6</sup>
 "encuentran en un mismo plano de igualdad,
 "representada por la situación jurídica de que
 "todos ellos tienen activos en su patrimonio
 "considerados como objeto gravado por la ley de la
 "materia y que, por consiguiente, por igual
 "debieran estar obligados (o exentos) de pagar el
 "impuesto al activo.
 "La inequidad que se aduce de la Ley del Impuesto
 "al Activo, de su Reglamento y del artículo primero
 "del Decreto publicado en el Diario Oficial de la
 "Federación del 24 de diciembre de 1996, se
 "evidencia de mejor manera con el desarrollo del
 "siguiente ejemplo: supóngase el caso de una
 "empresa que en el ejercicio de 1996 hubiera
 "obtenido ingresos en el impuesto sobre la renta



por un monto exacto de \$8'900,000.00 y, por ese motivo, en los términos del artículo primero del citado Decreto gozaría de la exención en comento. Al propio tiempo, imagínese el caso de otra empresa cuyos ingresos en ese mismo impuesto hubiesen sido de "un peso" más es decir, de \$8'900,001.00, la cual, por esa mínima diferencia de "un peso" respecto del otro contribuyente, sí quedaría obligada al pago puntual y completo de la gabela impetrada de inconstitucional tomando como base la totalidad de los activos que forman la base gravable del impuesto, en los términos previstos en el artículo 2° de la ley de la materia. Todo lo anterior, además de absurdo, actualiza la transgresión de los artículos 1°, 13 y 31, fracción IV, del Documento Fundamental. Más aún, en la situación hipotética antes descrita, tomando como premisa que el impuesto al activo grava una ganancia mínima presunta de los contribuyentes generada por la sola tenencia de activos destinados a actividades empresariales, también pudiera configurarse la injusticia producto de la inequidad que se aduce en el presente apartado de que la empresa beneficiada con la exención por haber obtenido ingresos en el impuesto sobre la renta por un monto exacto de \$8'900,000.00, tuviera activos con un valor en mucho superior al de los activos de la otra empresa que no goza de la exención por el hecho de que en el año de 1996 obtuvo ingresos por "un

"peso" más, es decir, por \$8'900,001.00. En otros términos en la situación antes anotada, la transgresión de las garantías constitucionales de igualdad y equidad en materia tributaria resulta de la circunstancia de que el tratamiento disparitario introducido en el impuesto al activo en función de los ingresos obtenidos por los contribuyentes en el año de 1996, llega al absurdo de conceder un tratamiento privilegiado a empresas que cuentan con activos cuyo valor es con mucho superior al de otras empresas que no gozan de esa misma exención.

"Sobre el particular, resulta aplicable, por mayoría de razón, el criterio sustentado por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis:

"EQUIDAD TRIBUTARIA, LA TRANSGRESION DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORIAS DE CONTRIBUYENTES."
"(Transcribe).

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995. Tesis P.L/95. Página 71.

"b) Por otra parte, la violación de los artículos 1º, 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Política Federal, resulta de lo dispuesto por el artículo 5º, segundo párrafo de la ley cuya inconstitucionalidad se aduce por conducto del presente libelo, como de manera injustificada se



"excluyen de las partidas deducibles para efectos
 "de este impuesto, las deudas que se contraten
 "con el sistema financiero o con su intermediación,
 "pues es claro que con esta disposición se otorga
 "un tratamiento inequitativo a los contribuyentes
 "obligados al pago de dicha contribución, al ser
 "innegable que estas últimas deudas, las no
 "deducibles, también afectan a la base del tributo,
 "ocasionándose con esto un trato inequitativo al
 "permitírsele a algunos contribuyentes las
 "deducciones de sus deudas y a otros no, por
 "situaciones ajenas a ellos y propias de los
 "acreedores.

COE. "En efecto, la exclusión de las deudas contratadas
 LA "CON:
 DEL DE AL. "con el sistema financiero o con su intermediación
 "ocasiona un trato inequitativo, pues al igual que
 "las demás deudas cuya deducción sí se encuentra
 "autorizada, aquéllas también debieran ser
 "consideradas como deducibles con el propósito
 "de disminuir la base gravable del impuesto ya que
 "tanto unas como las otras afectan a la ganancia
 "mínima presunta originada en la tenencia de
 "activos objeto del tributo y, por ende, no existe
 "razón alguna que justifique la exclusión de las que
 "sean contratadas con el sistema financiero o con
 "su intermediación. En el caso a estudio, es claro
 "que sí, por un lado, se permite la deducción de las
 "deudas contratadas con empresas residentes en
 "el país o con establecimientos permanentes
 "ubicados en México de residentes en el extranjero,

"y no la de las deudas que hubiesen sido
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación, se está haciendo una distinción
"injustificada entre deudas que siempre afectan la
"ganancia mínima presunta originada en la
"tenencia de activos objeto del tributo, por causas
"que no dependen directamente de la voluntad o de
"la actividad de los contribuyentes, sino de
"circunstancias que les son por completo ajenas,
"como lo es la calidad de sus acreedores.

"Se insiste: en la especie es claro que existe el
"otorgamiento de un tratamiento desigual a los
"contribuyentes que se encuentran en un mismo
"plano de igualdad, pues mientras a unos se les
"permite la deducción de las deudas que afectan su
"ganancia mínima presunta, a los otros no se les
"autoriza a tomar la propia deducción, no obstante
"que la realidad es que la ganancia mínima
"presunta de estos últimos también se encuentra
"afectada con las deudas contratadas con el
"sistema financiero o con su intermediación.

"Sobre el particular, es importante que Usía tenga
"en consideración que la Inconstitucionalidad que
"se aduce del artículo 5º, segundo párrafo, de la
"Ley del Impuesto al Activo, ya ha sido confirmada
"por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación
"en la tesis P.XLV/95, que a continuación se
"transcribe:



**"ACTIVO. EL ARTICULO 5° DE LA LEY DEL
"IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"EQUIDAD TRIBUTARIA." (Transcribe).**

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

"Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995. Páginas

"63 y 64.

**"c) Asimismo, la inconstitucionalidad de la
"contribución de que se trata se actualiza cuando
"la Ley del Impuesto al Activo establece: de manera**

"uniforme una tarifa única del 1.8% (antes del 2%),

"que resulta aplicable a todos los sujetos pasivos

"obligados, sin atender a distingo alguno y a

"consideraciones tales como su capacidad

"económica y el volumen de los activos que cada

"uno tenga. Respecto de impuestos directos, esto

"es, aquéllos que gravan la riqueza de los

"gobernados y sus manifestaciones, como es el

"caso del impuesto al activo, en estricto apego a

"los preceptos constitucionales mencionados, las

"tarifas de las contribuciones deben ser

"establecidas de modo variable y progresivo,

"considerando precisamente la capacidad

"contributiva de los particulares, para así gravar

"más a quien tenga un mayor patrimonio y menos a

"quien posea uno menor. Por lo tanto, si el

"impuesto al activo establece una sola tasa del

"1.8% (anteriormente del 2%) para todos los

"supuestos normativos y para todos los sujetos

"pasivos, dicho tributo resulta palmariamente

"inequitativo al estatuir un tratamiento igualitario a

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE LABORES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO RURAL
SECRETARÍA DE GUBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE FOMENTO RURAL
SECRETARÍA DE GUBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

"contribuyentes que entre sí guardan claros rangos
 "de disparidad, como lo es la circunstancia de que
 "cada uno de ellos tiene un diferente patrimonio,
 "representado por sus activos. Lo conducente
 "desde una perspectiva constitucional, en respeto
 "de las garantías de igualdad y de equidad
 "invocadas al inicio de este apartado, hubiera sido
 "que en la Ley del Impuesto al Activo se
 "estableciese una tarifa progresiva que afectara en
 "menor medida a quienes su capacidad
 "económica-contributiva fuera inferior, que otros
 "cuyo volumen de activos fuese superior.

"d) Por último, la inequidad de la Ley del Impuesto
 "al Activo y de su Reglamento y, con ello, **INFRACCIÓN**
 "infracción de los artículos 1º, 13 y 31, fracción **ARTICULO**
 "de la Constitución Federal se actualiza cuando en
 "la parte final del primer párrafo del artículo 1º, de
 "aquel ordenamiento, se consigna que: "(...) Las
 "personas distintas de las señaladas en este
 "párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de
 "bienes, incluso de aquellos bienes a que se refiere
 "el Capítulo III, del Título IV y los artículos 133,
 "fracción XIII, 148, 148-A y 149, de la Ley del
 "Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la
 "actividad de otro contribuyente de los
 "mencionados en este párrafo, están obligadas al
 "pago del impuesto, únicamente por esos bienes. "
 "Lo anterior es así, pues el hecho de gravar a cierto
 "tipo de sujetos en consideración al destino que
 "den a los bienes de su propiedad, esto es, en



"función al otorgamiento del uso o goce de los
"mismos a los contribuyentes, con exclusión de
"otros que, aún siendo propietarios de la misma
"clase de bienes, no conceden su uso o goce
"temporal a tales personas, representa un trato
"desigual a sujetos que en realidad se encuentran
"en una idéntica situación jurídica y de hecho,
"como lo es la propiedad de bienes de igual
"naturaleza. Por ello, el establecimiento de
"diferenciaciones entre unos y otros sujetos para
"determinación de los contribuyentes obligados al
"pago del impuesto al activo, en base a un criterio
"carente de índices objetivos y de equidad, es
"decir, tan solo a partir del destino que se dé a los
"bienes de propiedad de ellas, sin tomar en cuenta
"que lo que lógica y constitucionalmente es
"relevante, es la calidad de propietarios de tales
"bienes, lo que da lugar a que los ordenamientos
"legales reclamados sean conculcatorios de las
"garantías individuales indicadas al inicio de este
"apartado.

"Peor aún, acorde con el nuevo texto legal del
"precepto anteriormente transcrito, resulta que
"tanto el Capítulo III, del Título IV como los
"artículos 133, fracción XIII y 148-A, de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, se refieren únicamente a
"los ingresos de las personas físicas que
"correspondan al otorgamiento, a título oneroso,
"del uso o goce temporal de bienes inmuebles a
"otros contribuyentes del impuesto al activo, todo

"lo cual actualiza la transgresión de las garantías
"constitucionales en comento por los
"siguientes motivos:

"i) porque injustificadamente se excluye de este
"supuesto a las personas morales que no son
"contribuyentes del impuesto al activo y que de
"cualquier modo arriendan u otorgan, a título
"oneroso, el uso o goce temporal de bienes
"inmuebles;

"ii) porque al hacerse remisión al Capítulo III, del
"Título IV y a los artículos 133, fracción XIII y 148-A,
"de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en forma
"inexplicable sólo se incluyen actos onerosos
"_arrendamiento y, en general, otorgamiento del
"uso o goce temporal de inmuebles_ no así los que
"sean de carácter gratuito como el comodato
"ejemplo; y,

"iii) porque en el primer párrafo del artículo 1° de la
"ley impugnada de inconstitucional, de manera
"caprichosa se excluye del rango de
"contribuyentes a las personas físicas, así como
"las personas morales residentes en el extranjero,
"que otorguen el uso o goce temporal de bienes
"muebles, no obstante que éstos también pueden,
"de inicio, catalogarse como "activo fijo" para
"efectos del propio ordenamiento tributario, pero
"que por la veleidosa voluntad del legislador
"federal no quedan comprendidos en el precepto
"legal de que se trata. En esa tesitura, pues,
"acreditada la violación de los artículos 1°, 13 y 31,



fracción IV, de la Ley Fundamental, lo conducente
"es que la Justicia Federal otorgue a mi poderdante
"el amparo y protección constitucionales que
"reclama.

"SEGUNDO. Establece el artículo 1° de la
"Constitución Política del País que: "En los
"Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
"de las garantías que otorga esta Constitución, las
"cuales no podrán restringirse ni suspenderse,
"sino en los casos y con las condiciones que ella
"misma establece." A su vez, el artículo 14
"constitucional dispone que: "Nadie podrá ser
"privado de la vida, de la libertad o de sus
"propiedades, posesiones o derechos, sino
"mediante juicio seguido ante los tribunales
"previamente establecidos, en el que se cumplan
"las formalidades esenciales del procedimiento y
"conforme a las leyes expedidas con anterioridad
"al hecho." Por su parte, el artículo 16 de la Carta
"Magna preceptúa que: "Nadie puede ser
"molesto en su persona, familia, domicilio,
"papeles o posesiones, sino en virtud de
"mandamiento escrito de la autoridad competente,
"que funde y motive la causa legal del
"procedimiento."

ORTE DE
A NACIÓN
DE ACUERDO

"En estos términos, la Ley Suprema consagra en
"favor de los gobernados las garantías de igualdad,
"legalidad y seguridad jurídica, mismas que en
"materia tributaria se encuentran precisadas en el
"artículo 31, fracción IV, que dispone: "Son

**"obligaciones de los mexicanos: (...) IV. Contribuir
"para los gastos públicos así de la Federación,
"como del Estado y Municipio en que residan, de la
"manera proporcional y equitativa que dispongan
"las leyes."**

**"El análisis y exégesis de los preceptos
"constitucionales transcritos, permite concluir que
"el establecimiento de gravámenes por parte del
"Estado se encuentra sometido a tres requisitos
"básicos, que son:**

**"1. Que dichas contribuciones se encuentren
"consignadas en una ley, primordialmente en lo
"que hace a sus elementos esenciales; objeto,
"sujetos, base gravable y tasa o tarifa, así como
"todos aquellos factores relacionados con ellos
"que permitan su determinación, para que de esta
"forma no quede a la sola voluntad de la autoridad
"administrativa su imposición y cuantificación.**

**"2. Que esos tributos sean proporcionales y
"equitativos, estableciendo tarifas adecuadas a la
"capacidad económica de los obligados, para que
"los mismos no resulten exorbitantes respecto al
"objeto gravado, y dando igual trato a los sujetos
"que se encuentren en idénticas situaciones
"jurídicas y de hecho.**

**"3. Que sean destinados a cubrir el gasto público
"del Estado.**

**"Esto ha sido reconocido por el H. Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
"siguiente jurisprudencia:**



**"IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE
"LOS." (transcribe):**

**"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
"1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia número 173.**

"Páginas 173 y 174.

**"Los alcances de la garantía de legalidad en
"materia tributaria exigen que la imposición de
"contribuciones deba hacerse mediante leyes que
"formal y materialmente posean las características
"como tales, es decir, que sean emitidas por el**



CORTE DE
FEDERACION
DEL GOBIERNO

**"Poder Legislativo y que se encaminen a regular
"una serie indeterminada e indefinida de
"situaciones. En esta forma, es el Congreso de la
"Unión el único que puede establecer cargas
"fiscales a los particulares, a través de
"disposiciones generales abstractas e
"impersonales.**

**"El fin que se persigue con la exigencia
"constitucional de que los tributos y sus elementos
"esenciales _objeto, sujetos, base gravable y tasa
"o tarifa_ necesariamente se instituyan en una ley
"expedida por el Congreso Federal, mediante
"mandatos de carácter general, es la de garantizar
"a los gobernados un máximo de seguridad
"jurídica, proscribiendo cualquier arbitrariedad de
"los funcionarios que integran la administración
"pública. Por igualdad de razón, la forma y los
"términos en que se individualizarán, determinarán
"o calcularán, según sea el caso, los elementos
"esenciales de los gravámenes, será a través de**

"ordenamientos legales que tengan las cualidades
 "que se han referido con anterioridad, para evitar a
 "los contribuyentes la incertidumbre, la
 "imprevisión y la arbitrariedad en su cuantificación
 "y en su cobro. Por consiguiente, los elementos
 "fundamentales de las contribuciones y el
 "procedimiento que, en un momento, se debe
 "aplicar para determinarlas, tienen que consignarse
 "en una ley expedida por el Poder Legislativo
 "cuyas disposiciones sean generales, abstractas e
 "impersonales, pues de no ser así el tributo
 "respectivo devendría inconstitucional. Esta es la
 "razón por la que el Presidente de la República,
 "través de disposiciones reglamentarias o de
 "cualquier otro tipo de acuerdos o decretos
 "contengan disposiciones generales, abstractas e
 "impersonales, está constitucionalmente impedido
 "para modificar alguno de los elementos esenciales
 "de los tributos que han sido fijados por el
 "Congreso de la Unión, pues ello, además, sería
 "violatorio del artículo 28, primer párrafo, del
 "Documento Fundamental.

"En concordancia con lo anterior, el H. Pleno de la
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
 "sustentado la tesis jurisprudencial que a
 "continuación se transcribe:

"IMPUESTOS, BASES PARA DETERMINAR EL
 "MONTO DE LOS. LA LEY DEBE SEÑALARLAS."
 "(transcribe).



**Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia número 161.**

"Página 164.

**"Es de apuntarse que el señalamiento del objeto de
"los tributos debe hacerse expresamente en la ley
"que los contempla, en tanto que el de los sujetos,
"de la base gravable y de la tarifa pueden realizarse
"en el propio ordenamiento, o bien ser
"determinables por principios ciertos no expuestos
"a la sola voluntad de la autoridad que los liquidará
"y cobrará o de alguna otra autoridad o persona
"(incluyendo al titular del Poder Ejecutivo), sino
"exclusivamente a la del Congreso de la Unión.
"Los tres últimos factores pueden depender de un
"hecho presente o futuro que condicione la
"delimitación de los sujetos, de la base o de la tasa,
"mas nunca al querer de una persona o grupo
"individualizado, pues de lo contrario se provocaría
"un estado de absoluta incertidumbre jurídica. Lo
"anterior significa que tales elementos no pueden
"establecerse según el simple criterio de la
"autoridad administrativa, como lo sería un
"Reglamento expedido por el Presidente de la
"República o un diverso acuerdo o Decreto emitido
"por el propio funcionario o por otra autoridad
"administrativa, puesto que de otra manera se
"permitiría que fuese él quién determinase quiénes
"son los sujetos obligados al pago de las
"contribuciones, cuál la base gravable y cuál la
"cuota o tarifa aplicable, situación que en nuestro**



ORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

"régimen constitucional es completamente
 "inadmisable, como lo ha reconocido nuestro
 "Máximo Tribunal en la jurisprudencia antes
 "transcrita. Se insiste: la creación de los tributos y
 "la indicación de los elementos básicos, así como
 "los procedimientos que deben seguirse en su
 "caso, para precisarlos, debe hacerse mediante
 "una ley expedida por el Poder Legislativo en uso
 "de sus facultades legislativas y por conducto de
 "disposiciones de carácter general, abstracto e
 "impersonal, sin posibilidad alguna de que el
 "Presidente de la República o cualquier otra
 "autoridad administrativa puedan modificar
 "anular la aplicación de alguno de dichos
 "elementos.



"Ahora bien, en la especie resulta que el nuevo
 "sistema del impuesto al activo vigente a partir del
 "1º de enero de 1997, instituido a través de la Ley
 "del Impuesto al Activo, de su Reglamento y del
 "Decreto publicado en el Diario Oficial de la
 "Federación del 24 de diciembre de 1996, es
 "violatorio de los preceptos constitucionales
 "invocados al inicio de este apartado, según se
 "demuestra a continuación:

"a) Ello es así, específicamente en lo que respecta
 "al artículo primero del Decreto por el que se
 "otorgan estímulos fiscales en diversas
 "contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la
 "Federación de fecha 24 de diciembre de 1996,
 "cuando por su conducto el titular del Ejecutivo



Federal modifica de manera substancial uno de
"los elementos esenciales de la contribución
"reclamada de inconstitucional _sujetos pasivos_
"al establecer la exención total del pago del
"impuesto al activo que se cause durante el
"ejercicio de 1997, a los contribuyentes cuyos
"Ingresos para efectos de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta en el ejercicio de 1996 no hubiesen
"excedido de \$8'900.000.00.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE LA NACION
SERIA DE AUSENTE

"En efecto de acuerdo con las garantías
"individuales consagradas en los preceptos
"constitucionales citados a lo largo del presente
"apartado, es innegable que el señalamiento de los
"sujetos pasivos obligados al pago de los tributos,
"y la correlativa facultad de establecer las
"exenciones conducentes, es de la exclusiva
"competencia del Poder Legislativo Federal, la
"cual, conforme a lo antes expuesto, en ningún
"caso puede ser ejercida por el Presidente de la
"República, toda vez que, se insiste, la fijación y
"alteración de todos los elementos esenciales de
"las contribuciones es de la exclusiva
"competencia del Congreso de la Unión.

"Por consiguiente, si el Decreto de que se trata fue
"expedido por el titular del Poder Ejecutivo y por su
"conducto se introdujo una nueva exención que
"modifica substancialmente el universo de sujetos
"pasivos señalados en la ley de la materia como
"obligados al pago del impuesto al activo, la
"conclusión a la que debe llegarse es que el

"artículo primero de ese Decreto es francamente
"inconstitucional, al transgredir la garantía de
"legalidad que en materia tributaria consagra el
"artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

"Sobre el particular, el H. Pleno de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el
"criterio que se desarrolla en la jurisprudencia
"número P.25/91 que a continuación se transcribe:

"EXENCION DE IMPUESTOS. SOLO COMPETE
"ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN
"UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA
"FACULTAD REGLAMENTARIA." (Transcribe).

"Semanario Judicial de la Federación. Octava
"Epoca. Tomo VII. Junio de 1991. Páginas 54 a 60.

"b) Por otro lado, en lo que hace al objeto gravado
"previsto en la Ley del Impuesto al Activo, el
"señalamiento de que el mismo lo constituye el
"activo" de los sujetos obligados al pago del
"impuesto respectivo, es sumamente vago e
"impreciso, a la vez de que carece de una
"definición legal que lo sustente, ya que en el texto
"de la ley y de su Reglamento nunca se precisa qué
"debe considerarse como "activo" de los sujetos
"pasivos, ni tal definición es dable encontrarla en
"un diverso ordenamiento legal expedido por el
"Congreso Federal. En contra no vale sostener que
"el concepto del término "activos" es
"proporcionado por la técnica contable, toda vez
"que desde el ángulo estrictamente constitucional
"las definiciones contables en nada resultan



"aplicables para la fijación y precisión de uno de
"los elementos esenciales de las contribuciones,
"pues ello únicamente puede hacerse mediante
"leyes emitidas por el Poder Legislativo Federal.

"Al igual, tampoco es válido argumentar que en sí
"el objeto gravado del impuesto al activo se infiere
"de las fracciones II y III del artículo 2° de la ley
"respectiva, en las que se hace referencia a los
"activos fijos, gastos y cargos diferidos y a los
"terrenos, ya que, en la forma acreditada en este
"apartado, el principio de legalidad que rige en
"materia tributaria ordena que el objeto gravado
"por cualquier impuesto tiene que encontrarse
"específica y plenamente determinado en el
"ordenamiento legal correspondiente y nunca
"llegarse a él por medio de inferencias o
"inducciones, puesto que si este procedimiento es
"utilizado por las autoridades fiscales federales, la
"aplicación de inferencias o inducciones no
"encontrarían límite objetivo alguno, en franca
"afectación de los intereses jurídicos tutelados por
"las garantías constitucionales anteriormente
"invocadas.

"Del mismo modo, la indefinición e imprecisión del
"objeto gravado por la Ley del Impuesto al Activo
"que origina su inconstitucionalidad, se patentiza
"en el hecho de que, en el caso de los activos
"consistentes en terrenos, la fracción III del artículo
"2° del cuerpo legal en cita determina que, para el
"cálculo de la base gravable, se considerará el

"monto original de la inversión de los mismos. Sin embargo, resulta que, acorde con los artículos 41, 42 y 44, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los terrenos no se incluyen en el concepto de inversiones y, por ende, respecto de ellos no es dable computar el monto original de la inversión, con la consecuencia única y perjudicial para la ahora quejosa de que, por ese supuesto, o sea, el de la fracción III del artículo 2° de la Ley del Impuesto al Activo, el objeto del tributo no está legalmente definido ni delimitado objetivamente en cuanto a sus alcances.

"Asimismo, la violación al principio de legalidad que impera en materia tributaria en lo concerniente al objeto gravado por el impuesto al activo, se reitera en el artículo 4° de la ley que instituye, al establecer que, "entre otros", se consideran activos financieros el efectivo en caja, las inversiones en títulos de crédito, las cuentas y documentos por cobrar, así como los intereses devengados en favor y no cobrados. En efecto, cuando el texto legal incluye el término "entre otros" para determinar uno de los conceptos que conforman el objeto gravado, lo que en realidad hace es fijar de manera imprecisa e incierta ese elemento esencial del impuesto, al no establecer un límite objetivo a la definición que a los activos financieros corresponde, con la repercusión de que los sujetos pasivos quedan en la incertidumbre sobre la forma y términos en que se



"calcularán esos activos, así como la grave e
"inevitable contingencia de que las autoridades
"administrativas sean las que fijen los elementos
"que deben incluirse en la frase "entre otros", para
"calcular los activos financieros.

"c) Por otro lado, en lo que atañe a la base gravable
"de la gabela en cuestión, la inconstitucionalidad
"de la Ley del Impuesto al Activo deviene de la
"circunstancia de que el procedimiento instaurado
"para su cálculo en los artículos 2° y 3° de la
"misma, es sumamente confuso y requiere de la
"aplicación de elementos técnicos con que no
"cuentan los contribuyentes, tales como la
"aplicación de los factores de actualización a que
"se hace mención en el artículo 3° del propio
"cuerpo legal y que resultan de la aplicación de
"índices fijados arbitrariamente por el Banco de
"México. Para concluir inexorablemente que el
"impuesto al activo es violatorio de las garantías
"individuales mencionadas al inicio del presente
"apartado, es suficiente el análisis que se realice
"de los artículos 2° y 3° de la ley de la materia, de
"cuyo estudio se desprende que el procedimiento
"para cuantificar la base gravable de la
"contribución es embrollado e indiscernible,
"originando así que los sujetos pasivos queden de
"plano imposibilitados para determinar ellos
"mismos la base gravable del impuesto al activo.
"Más grave es lo anterior, si se tiene en cuenta que
"para aplicar los factores de actualización en los

"**términos de los artículos 2° y 3°, la parte quejosa**
"tiene que utilizar índices dados a conocer por el
"Banco de México, respecto de los cuales ella no
"tiene certidumbre sobre su objetividad, a más de
"que, en el caso de que la institución financiera no
"los proporcione, resultará que los contribuyentes
"no pueden calcular la base gravable del tributo de
"referencia.

"**Lo anterior es tan patente, que cuando la fracción**
"III del artículo 2° de la Ley del Impuesto al Activo
"dispone que, en tratándose de terrenos, para el
"cálculo de la base gravable debe tenerse en
"cuenta el monto original de la inversión de cada
"uno de ellos, de plano imposibilita a los sujetos
"pasivos el cómputo de la base gravable de la
"contribución, ya que, como se argumentó con
"antelación, en los términos de los artículos 41, 42
"y 44, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el
"caso de los terrenos no hay monto original de la
"inversión, al no ser los mismos uno de los
"conceptos que fiscalmente integran las
"inversiones de los contribuyentes.

"**Del mismo modo, la transgresión a las garantías**
"constitucionales mencionadas resulta cuando en
"el artículo 3°, cuarto párrafo, de la Ley del
"Impuesto al Activo se determina que los
"inventarios tienen, en primer término, que
"valuarse conforme a los "principios de
"contabilidad generalmente aceptados", pues esto
"significa que en ese aspecto la base gravable del



"impuesto será cuantificada tomando en
"consideración elementos cuyos límites no son
"proporcionados ni fijados por el Poder Legislativo
"Federal, sino simplemente se basan en conceptos
"totalmente abstractos, imprecisos y
"subjetivamente fijados por una entidad, persona o
"grupo de personas no identificadas en ese
"precepto y que, de cualquier manera, carecen de
"un carácter constitucionalmente reconocido que
"les permita establecer, como si fuera el Congreso
"de la Unión, "principios de contabilidad" cuya
"finalidad es la de calcular la base gravable del
"impuesto al activo. Desde una perspectiva
"puramente constitucional, es inadmisibles que el
"Poder Legislativo delegue en una entidad, persona
"o grupo de personas (por lo demás nunca
"especificadas), la posibilidad de instituir
"principios en materia tributaria para determinar
"algún elemento esencial de las contribuciones, en
"concreto la base gravable de la gabela en
"cuestión.

"En este orden de ideas, siendo evidente que tanto
"la Ley del Impuesto al Activo como el Decreto
"publicado en el Diario Oficial de la Federación del
"24 de diciembre de 1996, infringen en perjuicio de
"la ahora peticionante las garantías tuteladas por
"los artículos 1º, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Ley
"Suprema de la Nación, lo procedente es que la
"Justicia de la Unión le conceda el amparo y
"protección constitucional que solicita.

"**TERCERO. La Ley del Impuesto al Activo y su**
"Reglamento son violatorios de las garantías de
"proporcionalidad y equidad de las contribuciones
"que consagra el artículo 31, fracción IV, de la
"Constitución Federal, cuando en ellos se presume,
"sin posibilidad de prueba en contrario lo que
"constituye una presunción juris et de jure, que los
"bienes que integran el activo de los
"contribuyentes siempre producen un rendimiento
"mínimo por concepto de utilidad que, en forma
"complementaria al impuesto sobre la renta, debe
"entonces quedar gravada con la tasa del 1.8%
"(antes del 2%) sobre el valor de tales bienes.

"**En efecto, de acuerdo con el precepto**
"constitucional antes invocado, la garantía
"proporcionalidad exige que todos los gravámenes
"sean fijados de acuerdo con la capacidad
"económica de los contribuyentes, para que las
"personas que obtengan ingresos elevados
"tributen en forma cualitativamente superior a los
"de medianos y reducidos recursos. Por su parte,
"el principio de equidad se traduce en la igualdad
"ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos
"de un mismo tributo, con el propósito de que
"todos ellos reciban, entre otros aspectos, un
"tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis
"de causación, acumulación de ingresos gravables,
"deducciones permitidas y plazos de pago,
"pudiendo únicamente variar las tarifas tributarias
"aplicables si a través de la variación se consigue





que los contribuyentes tributen de acuerdo con su capacidad económica.

"Lo anterior ha sido reconocido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. " (Transcribe).

"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995. Tomo I. Jurisprudencia número 170. Páginas 171 y 172.

"Ahora bien, del contenido de los ordenamientos reclamados de inconstitucionales se concluye que el impuesto al activo es una contribución complementaria del impuesto sobre la renta. Ello se corrobora con las diferentes disposiciones legales contenidas en dichos cuerpos legales, en específico los artículos 2-A, 6°, 8° y 9° de la ley de la materia, y también con la exposición de motivos que de la propia ley fue sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, que en lo conducente señala lo siguiente: (Transcribe).

"De ello resulta, pues, que el impuesto al activo es un tributo que normalmente no produce afectaciones económicas a los contribuyentes, pues si se parte del hecho de que los contribuyentes obligados a su pago deben obtener una ganancia mínima por la cual deban cubrir el impuesto sobre la renta, el derecho al acreditamiento que de esta última contribución se permite en el artículo 9° de la ley impetrada de



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL SEÑALADO

"Inconstitucional permite afirmar que los sujetos pasivos del impuesto al activo no verán, en principio, incrementada su carga impositiva, teniendo ellos, inclusive, derecho a la devolución de las cantidades que hubieran pagado por concepto de impuesto al activo, cuando el impuesto sobre la renta efectivamente pagado sea superior.

"Lo anterior pone de manifiesto que la ley reclamada parte de la ficción legal de que todos los sujetos pasivos, sin excepción alguna, obtienen una utilidad por la sola tenencia de activos afectos a la realización de actividades que a su vez son gravadas en el impuesto sobre la renta. Ello permite inferir que el objeto del impuesto al activo, conforme al verdadero sentido de su establecimiento y su estructuración legal, lo constituye la utilidad ficta e hipotética originada por la tenencia de activos destinados a actividades objeto del impuesto sobre la renta tal como lo ha reconocido el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 11/96 que a continuación se transcribe:

"ACTIVO. IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD





**"CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE
"ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES
"(CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS
"EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL."
"(Transcribe).**

**"Así, pues, son los activos de los contribuyentes
"los que integran la base del impuesto al activo, y
"es a través de la aplicación de la tasa del 1.8%
"(antes del 2%) prevista en el primer párrafo del
"artículo 2° de la ley respectiva, como se obtiene el
"importe de este tributo. Esto significa que los
"activos de los sujetos pasivos son los que
"constituyen la medida o el instrumento del que se
"vale el legislador federal para determinar la
"utilidad ficta objeto del impuesto reclamado.**



**"Consecuentemente, cabe considerar que el
"impuesto al activo es un impuesto personal,
"complementario al impuesto sobre la renta y cuyo
"objeto es gravar la ganancia mínima presunta
"originada por la tenencia de activos destinados a
"actividades que, a su vez, son gravadas por la Ley
"del Impuesto sobre la Renta. Por ello en principio
"vale concluir que el impuesto al activo no
"incrementa la carga impositiva de los
"contribuyentes, en virtud del derecho de
"acreditamiento previsto en el artículo 9° de la ley
"de la materia.**

**"En este orden de ideas, pues, la transgresión del
"artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal
"se actualiza al momento de que, en virtud de la**

"imputación de una ganancia mínima presunta por parte de los contribuyentes y del derecho de acreditamiento que sólo a algunos de ellos beneficia, el impuesto al activo deviene de desproporcionado e inequitativo por las razones siguientes:

"a) Utilidades fictas e hipotéticas (no reales): lo anterior es así, en primer término, porque la imputación de una utilidad ficta a cargo de los contribuyentes presupone, de manera dogmática y conforme al solo cálculo mental e imaginario del legislador federal, que todos los contribuyentes, y en especial las empresas, en forma permanente y uniforme deberán percibir una utilidad que para efectos del impuesto sobre la renta sea equivalente al 1.8% del tributo impugnado de Inconstitucional, con independencia de si las condiciones prevalecientes en el mercado y en la economía nacional deriven en resultados adversos para ellas. Así, por ejemplo, pudiera resultar que en épocas de una fuerte recesión económica, como la que actualmente atraviesa el país, o bien por una reducción en las actividades de las empresas o por el incremento en los costos de producción, los contribuyentes no obtengan utilidades reales afectas al pago del impuesto sobre la renta; empero, debido a una mera ficción legal establecida en la Ley del Impuesto al Activo, esos contribuyentes de cualquier modo estarán obligados a pagar la gabela impetrada de





**"inconstitucional "como si en verdad" hubieran
"obtenido esas utilidades. Disgresionalmente cabe
"señalar que si existen utilidades reales y
"efectivas, los contribuyentes tendrán que pagar el
"impuesto sobre la renta que resulte.**

**"Es innegable que al amparo de las garantías
"individuales invocadas al inicio de este apartado,
"en tratándose de los llamados impuestos directos
"(los que gravan la riqueza de los gobernados o
"sus manifestaciones), si no existe una utilidad real
"y efectiva para los contribuyentes, entonces no
"hay una razón constitucionalmente válida que
"soporte el establecimiento de contribuciones
"directas o complementarias sobre utilidades
"determinadas de manera ficticia e hipotética por el
"Congreso de la Unión, sea bajo el concepto de
"impuesto sobre la renta o de impuesto al activo.
"Por ende, si el tributo impugnado en el presente
"juicio de garantías grava la utilidad ficta e
"hipotética de los sujetos pasivos, deberá
"entenderse que lo que en realidad se está
"gravando son utilidades inexistentes de los
"contribuyentes, con lo cual se medra de manera
"trascendente y ruinosa su patrimonio, pues
"deberán pagar el impuesto al activo con recursos
"pecuniarios que no provienen de actividades por
"las cuales obtuvieron pérdidas para efectos del
"impuesto sobre la renta.**

**"Más aún, conforme al sistema del impuesto
"reclamado de inconstitucional, la imputación de**



CORTE DE
EJECUTIVO
FEDERAL DE JUSTICIA

*"una utilidad ficta e hipotética a cargo de los
 "contribuyentes le impide demostrar la inexistencia
 "de una utilidad real por la que sí debieran pagar el
 "impuesto sobre la renta, de lo que se colige que el
 "legislador federal en ningún momento atiende a la
 "capacidad contributiva real de los sujetos pasivos,
 "sino solamente a una ficta e hipotética,
 "equivalente a un porcentaje unilateral y
 "arbitrariamente fijado por el Congreso de la Unión
 "del valor de los activos. En otros términos al
 "tiempo en que el legislador federal se desentiende
 "por completo de la capacidad contributiva real de
 "los sujetos pasivos y la sustituye por una unidad
 "ficta, se aparta por completo de lineamientos
 "exigidos por las garantías constitucionales de
 "proporcionalidad de los tributos y del criterio
 "jurisprudencial anteriormente transcrito, puesto
 "que en la especie no se respeta el principio de que
 "el impuesto al activo deba pagarse conforme a la
 "capacidad económica real de los contribuyentes.
 "Peor aún, la inconstitucionalidad aquí aducida se
 "agrava con el hecho de que la imputación de una
 "utilidad ficta a cargo de los sujetos pasivos, tiene
 "como sustento una presunción juris et de jure,
 "que como tal no admite prueba en contrario.
 "En adición a lo antes expuesto, es importante que
 "su Señoría tenga en consideración la posibilidad
 "de que esta presunción carezca de un sustento
 "válido que la justifique, pues la influencia de
 "múltiples factores de la realidad económica puede*




CORTE DE
REVISION
EN EL JUICIO

"propiciar que esa utilidad ficta sea inexistente y,
"por consiguiente, que nunca sea efectivamente
"obtenida por los contribuyentes. De ahí que si los
"ordenamientos legales en cita no prevén la
"posibilidad de que los interesados desvirtúen la
"presunción de que se trata, la violación del
"principio de proporcionalidad consagrado en el
"artículo 31, fracción IV, constitucional, se
"configura por el hecho de que la causación del
"impuesto al activo en ningún momento atiende a
"la capacidad tributaria real de los sujetos pasivos
"obligados a su pago, sino a una utilidad hipotética
"cuya imputación a los gobernados no admite
"prueba en contrario.

"Así, la presunción juris et de jure que se ratifica en
"el texto de la Ley del Impuesto al Activo, puede
"llevar al extremo, carente de una justificación
"constitucionalmente válida, qué empresas con
"bienes muebles e inmuebles destinados a una
"actividad empresarial que no generen riqueza
"afecta al pago del impuesto sobre la renta, de
"cualquier manera sufran el impacto de un
"gravamen imaginario ideado por el Congreso de la
"Unión, cuyo único efecto es que el mismo no
"incida sobre una riqueza inexistente, sino en
"última instancia sobre el valor de los propios
"activos, pues serán éstos con los contribuyentes
"los que deberán afrontar el pago del impuesto
"reclamado inconstitucional. En otros términos,
"ante una ganancia presunta generada por la sola

"tenencia de activos, sin consideración alguna
 "sobre la existencia de ganancias reales por parte
 "de los contribuyentes, el resultado final será que
 "ellos tendrán que afectar sus propios activos
 "(vendiéndolos, dándolos en garantía, etcétera)
 "para allegarse recursos económicos que les
 "permitan liberarse de toda responsabilidad en el
 "pago del impuesto al activo. Al parecer de las
 "ahora quejas, esta situación es de plan
 "inadmisible a la luz de las garantías
 "constitucionales invocadas al inicio de este
 "apartado.

"El criterio antes expuesto ha sido convalidado por
 "la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
 "tesis P.XLVII/95 que a la letra señala que:


 SUPREMA
 JUSTICIA D
 SECRETARIA DE

"**ACTIVO. ESTE IMPUESTO QUEBRANTA EL
 "PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL NO
 "PREVER LA POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA
 "PRESUNCION DE GANANCIA MINIMA OBJETO
 "DEL GRAVAMEN."** (Transcribe).

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
 "Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995. Página
 "65.

"b) Sistema de acreditamiento: por otra parte, la
 "inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al
 "Activo se configura en razón de la
 "desproporcionalidad e inequidad que conlleva el
 "derecho de acreditamiento establecido en su
 "artículo 9º, pues siendo el objeto del impuesto la
 "utilidad ficta que hipotéticamente se origina por la



CORTE DE
E LA NACION
ERAL DE ACUERDOS

"tenencia de activos, el sistema de acreditamiento
 "previsto en dicho precepto origina que
 "contribuyentes que efectivamente tengan este tipo
 "de utilidad no paguen el impuesto al activo,
 "mientras que otros contribuyentes que en realidad
 "no tengan utilidad alguna sí tendrán que pagarlo,
 "de donde se sigue que los sujetos pasivos que
 "tengan menor capacidad contributiva soportarán
 "la carga impositiva, en tanto que los que tengan
 "una mayor capacidad no lo harán, todo lo cual
 "actualiza la desproporcionalidad e inequidad del
 "impuesto al activo, al no atender a la capacidad
 "tributaria de los contribuyentes y al conceder un
 "trato igual a los desiguales y desigual a los
 "iguales. En contra de esta afirmación no valdría
 "sostener que ese derecho de acreditamiento se ha
 "establecido en forma general en favor de todos los
 "contribuyentes, puesto que, al final de cuentas, su
 "aprovechamiento no es general, ya que no todos
 "ellos podrán hacer uso del mismo, sino sólo los
 "sujetos pasivos que declaren utilidades en el
 "impuesto sobre la renta, y no los que no las
 "reporten.

"La anterior afirmación ha sido respaldada por la H.
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
 "siguiente tesis:

"'ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY QUE
 "REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS
 "PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
 "TRIBUTARIA. (REFORMAS Y ADICIONES

"PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
"FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)."
"(Transcribe).

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995. Tesis
"P.XLVI/95. Página 64.

"c) Tasa única es desproporcionada: al tenor de la
"fracción IV del artículo 31 de la Constitución
"Federal, la imposición de contribuciones a cargo
"de los particulares queda sujeta al requisito de
"que las mismas sean proporcionales y equitativas,
"con lo cual se propende a que haya una
"conveniente progresividad en la cuantía de los
"tributos respecto de la riqueza de los sujetos
"obligados, así como una necesaria mesuración
"entre el objeto y la base de los gravámenes,
"relación que precisamente debe guardar un justo
"equilibrio para evitar que los mismos sean
"exorbitantes y ruinosos. En estos términos, se
"respetan dos de los aspectos de la garantía de
"proporcionalidad consagrada por la fracción IV del
"artículo 31 de la Ley Fundamental: uno que no se
"arruine la capacidad económica y contributiva de
"los gobernados, y dos, que exista una razonable
"tarifa sobre la base gravable.

"Sobre el particular, el H. Pleno de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado la
"jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS.
"NATURALEZA." (Transcribe).



Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia número 387.
"Páginas 358 a 361.

"En este sentido, pues, para que los tributos
"respeten el principio de proporcionalidad
"invocado, es requisito constitucional ineludible el
"que su pago se realice en razón de la aplicación
"de tarifas diferentes y progresivas. En materia de
"impuestos directos, esto es, de aquéllos que
"gravan la riqueza y sus manifestaciones, lo
"anterior encuentra su máxima representación,
"puesto que será a través de tasas escalonadas y
"progresivas como en mejor forma se alcanzará la
"justicia tributaria, para que así participen en
"mayor medida quienes tengan un patrimonio
"superior que otros con uno inferior.

"Sin embargo, contrariando la garantía de
"proporcionalidad de la fracción IV del artículo 31
"de la Constitución Federal, las reformas a la Ley
"del Impuesto al Activo publicadas en el Diario
"Oficial de la Federación de fecha 10 de mayo de
"1996, ratifican la aplicación en perjuicio de mi
"mandante de una tasa única del 1.8%, lo cual
"conlleva a que los sujetos obligados tengan que
"enterar ese impuesto de manera
"desproporcionada e injusta, pues en forma
"cualitativa todos ellos deben pagar una misma
"cantidad del impuesto al activo, con
"independencia de la mayor o menor riqueza que
"se encuentre representada con sus activos. De

"conformidad con la jurisprudencia transcrita con
"anterioridad en el presente apartado, en el
"supuesto de los impuestos directos, como es el
"debatido en este juicio de garantías, el
"establecimiento de tarifas fijas es violatorio del
"artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

"Por todo lo expuesto a lo largo del presente
"apartado, es incuestionable que el sistema
"impositivo ratificado en la Ley del Impuesto al
"Activo a través de las reformas publicadas en el
"Diario Oficial de la Federación del 10 de mayo de
"1996, es violatorio del artículo 31, fracción IV
"constitucional, todo lo cual hace que la Justicia de
"la Unión deba conceder a la ahora quejosa, el
"amparo y protección constitucionales que
"reclama.

"CUARTO. Del mismo modo, la Ley del Impuesto al
"Activo es violatoria de las garantías de legalidad y
"seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14, 16
"y 31, fracción IV, de la Constitución Política del
"País, al haberse emitido por el Congreso
"Federal en uso de una facultad que no le
"corresponde, puesto que la posibilidad de instituir
"el tributo cuya inconstitucionalidad se reclama
"compete exclusivamente al Poder Legislativo de
"las entidades federativas, para su
"aprovechamiento total por parte de las haciendas
"municipales, acorde con el artículo 124 de la Carta
"Magna, relacionado con los numerales 73,
"fracciones VII y XXIX, 115, fracción IV, apartado a),





117, fracciones IV a VII, y 118, de la propia Ley Fundamental.

"La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de la reforma al artículo 115 constitucional del 3 de febrero de 1983, determinó en la jurisprudencia número 172 intitulada "IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, Tomo I, página 173), que la competencia entre la Federación y los Estados para imponer contribuciones, se delimita a través de un sistema complejo, cuyas premisas fundamentales son las siguientes:

"a) Concurrencia contributiva de la Federación y las Entidades Federativas en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII, y 124 constitucionales).

"b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal).

"c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de las Entidades Federativas (artículos 117, fracciones IV a VII, y 118 constitucionales).

"Sin embargo, a la luz del actual texto del artículo 115 de la Constitución de la República, dicha jurisprudencia es insuficiente, toda vez que se

"requiere que las premisas fijadas en ellas sean
 "ampliadas, para que las mismas no sólo se
 "determinen desde la particular perspectiva de la
 "Federación, como en ella se hace sino que
 "también se resuelva el problema de la atribución
 "de competencia impositiva entre las esferas del
 "gobierno involucradas _Federación y entidades
 "federativas_ desde el ángulo de los Estados, e
 "incluso desde el de los Municipios, que también
 "necesitan de una hacienda (patrimonio) para
 "cumplir las funciones públicas que les
 "concernen.

"Por lo tanto, en esos tiempos es preciso
 "establecer como premisa fundamental correlativa
 "a la que nuestro Máximo Tribunal indicó
 "limitar la competencia de los Estados, a partir de
 "lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución
 "General de la República, que existen limitaciones
 "a la facultad impositiva de la Federación, porque
 "hay reserva expresa y concreta de determinadas
 "materias a las entidades federativas, tanto para
 "conformar las propias haciendas estatales como
 "las municipales. Debe destacarse que la intención
 "del Poder Revisor de la Constitución, al llevar a
 "efecto la reforma al artículo 115 de la Norma
 "Fundamental del 3 de febrero de 1983, fue
 "precisamente la de establecer una redistribución
 "de competencias en materia hacendaria entre la
 "Federación, Estados y Municipios.





"En efecto, el artículo 115 de la Constitución Política del País, en su texto vigente a partir de 1983, en su parte conducente prescribe que:

"Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [...]"

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo

CITE DE
A NACIÓN
LA GUERRA

caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles" (El subrayado es nuestro).

"En la forma expresada en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a diversos preceptos constitucionales, entre ellas al artículo 115, remitida por el Presidente de la República al Congreso Constituyente Permanente, la normatividad introducida en lo referente a las haciendas municipales, tiene como finalidad que la autonomía municipal logre su realización plena a través de una segura percepción de ingresos

"suficientes para consolidar su patrimonio, entre
 "los cuales se encuentran los de naturaleza
 "tributaria, estableciendo, entre otras cosas, una
 "nueva distribución de competencias en materia
 "fiscal entre la Federación, Estados y Municipios.

"Tales objetivos se desprenden, con meridiana
 "claridad de la exposición de motivos arriba
 "aludida, la cual, en lo conducente, establece:

"La descentralización exige un proceso decidido y
 "profundo, aunque gradual, ordenado, y eficaz de la
 "revisión de competencias constitucionales entre
 "Federación, Estados y Municipios; proceso que
 "deberá analizar las facultades y atribuciones
 "actuales de las autoridades federales, y de las
 "autoridades locales y municipales, para
 "determinar cuáles pueden distribuirse para un
 "mejor equilibrio entre las tres instancias del
 "gobierno constitucional.

"Estamos convencidos que la redistribución de
 "competencias que habremos de volver al
 "Municipio todas aquellas atribuciones
 "relacionadas con la función primordial de esta
 "Institución [...]

"Dentro de estos grandes lineamientos como
 "consecuencia de los estudios realizados y como
 "corolario de la intensa consulta popular
 "efectuada; consideramos como medida
 "fundamental para robustecer el municipio, piedra
 "angular de nuestra vida republicana y federal,
 "hacer algunos cambios al artículo 115 de la





"Constitución, tendientes a vigorizar su hacienda,
 "su autonomía política y en lo general aquellas
 "facultades que de una u otra manera, paulatina
 "pero constantemente habían venido siendo
 "absorbidas por Estados y la Federación [...]

"Por ende, en este renglón, fundamental para la
 "subsistencia y desarrollo de los municipios,
 "consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en
 "primer término, como concepto originario del
 "artículo 115, la libre administración de su



CORRE
 DE LA NACION
 REG. DE ACTOS

"hacienda por parte de los municipios, pero por
 "otra parte, en una fórmula de descentralización, de
"correcta redistribución de competencia en materia

"fiscal, estimamos conveniente asignar a las
"comunidades municipales los impuestos o

"contribuciones inclusive con tasas adicionales,

"que establezcan los Estados sobre la propiedad

"inmobiliaria así como de su fraccionamiento,

"división, consolidación, traslado y mejora y las

"que tengan por base el cambio de valor de los

"inmuebles [...]"

"Derechos del Pueblo Mexicano. Cámara de

"Diputados del Congreso de la Unión, Tomo XI,

"México 1985, páginas 282-286. (El subrayado es

"nuestro).

"En tal sentido, si el artículo 115 constitucional

"garantiza a los Municipios que sólo éstos perciban

"las contribuciones previstas en el inciso a) de su

"fracción IV, esa garantía es oponible tanto a la

"Federación como a las entidades federativas, sin

"excepción alguna, aunque las últimas con la
 "variante de que son ellas las que cuentan con la
 "facultad legislativa exclusiva para imponerlas. De
 "este modo, se asegura a los Municipios que la
 "Federación y los Estados nunca podrán establecer
 "en su propio favor los tributos de que se trata,
 "porque de diversa manera se afectaría
 "substancialmente a las haciendas municipales, lo
 "que precisamente procura evitar el artículo 115 de
 "la Carta Magna. Es tan claro el sentido de este
 "dispositivo, que en el penúltimo párrafo de su
 "fracción IV se consigna que:

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los
 "Estados para establecer las contribuciones a que
 "se refieren los incisos a) y c), no establecerán
 "exenciones o subsidios respecto de las
 "mencionadas contribuciones, en favor de
 "personas físicas o morales, ni de instituciones
 "oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio
 "público de la Federación, de los Estados o de los
 "Municipios estarán exentos de dichas
 "contribuciones."

"Así la conclusión única que se deriva de la
 "interpretación lógica y sistemática de los
 "preceptos constitucionales citados, la cual sirve
 "como premisa fundamental para delimitar la
 "competencia tributaria en el sistema federal
 "mexicano, es que las contribuciones
 "contempladas en el inciso a) de la fracción IV del
 "numeral 115 de la Constitución Federal, y en





específico las que recaigan sobre la propiedad
"Inmobiliaria, exclusivamente pueden ser
"establecidas por las legislaturas de las entidades
"federativas, pero siempre en favor de los
"Municipios. De ahí que precisamente que el
"impuesto predial sea un tributo de tipo estatal y
"no federal.

"Frente a ello, es incuestionable que la Federación
"tiene limitada sus facultades impositivas para
"establecer contribuciones sobre los conceptos
"enlistados en el dispositivo indicado, porque
"existe reserva expresa y concreta de esas
"materias a los Estados, en garantía de la
"seguridad y consolidación de las haciendas
"municipales, y por consiguiente, cualesquiera de
"esas gabelas que sea instituida por la Federación,
"será palmariamente inconstitucional, al provenir
"de un órgano incompetente para esos efectos.
"Ahora bien, en los términos de los ordenamientos
"legales reclamados de inconstitucionales, el
"impuesto al activo tiene como objeto gravado
"precisamente el "activo" de los sujetos pasivos.
"De conformidad con el artículo 2° de la ley que
"instituye dicho tributo, se infiere que entre los
"últimos se comprenden los terrenos y los activos
"fijos, y a su vez, entre los últimos se incluyen a las
"construcciones en términos de los numerales 42,
"segundo párrafo, y 44, fracción I, de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, a la que remite el artículo
"14 de la Ley del Impuesto al Activo.



CORTE
DE LA
FEDERACIÓN

*"Para ello, atento al artículo 750, fracción I, del
 "Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación
 "en la especie por disposición de los numerales 1°
 "del propio ordenamiento y 5° del Código Fiscal de
 "la Federación, como los terrenos y las
 "construcciones son bienes inmuebles y su
 "adquisición constituye la propiedad inmobiliaria
 "de las personas que los adquieren, en el presente
 "caso el Poder Legislativo Federal es incompetente
 "para establecer sobre tales inmuebles el tributo
 "cuya inconstitucionalidad se invoca, al ser éste de
 "la exclusiva atribución impositiva de los Estados y
 "siempre en provecho de los Municipios, acorde
 "con el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la
 "Constitución General de la República, según ha
 "quedado argumentado y acreditado a lo largo del
 "presente apartado.*



*"En esta tesitura, siendo evidente la violación de
 "los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, del
 "Documento Fundamental, lo conducente es que la
 "Justicia de la Unión conceda a la ahora quejosa el
 "amparo y protección constitucionales que
 "reclama."*

CUARTO. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, al que por turno fue remitida la demanda respectiva, por auto del once de marzo de mil novecientos noventa y siete, la admitió a trámite; y en la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de abril siguiente, dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:



**"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de
"garantías que promueve JOSE LUIS FERNANDO
"GUERRERO CORDOVA, en su carácter de
"representante legal de INDUSTRIA MEXICANA DEL
"ALUMINIO, sociedad anónima de capital variable,
"contra los actos y autoridades que se precisaron
"en los considerandos segundo y cuarto de esta
"resolución.**

**"SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
"PROTEGE a la quejosa INDUSTRIA MEXICANA
"DEL ALUMINIO, sociedad anónima de capital
"variable, por conducto de su representante legal
"JOSE LUIS FERNANDO GUERRERO CORDOVA,
"contra actos de las autoridades señaladas en el
"considerando tercero y quinto de esta
"determinación."**

QUINTO. Inconforme con la sentencia anterior, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por sí y en representación del Presidente de la República, interpuso el recurso de revisión mediante escrito firmado en su ausencia por el Procurador Fiscal de la Federación, y presentado ante el Juez de Distrito del conocimiento, el que lo remitió junto con el expediente de amparo relativo a esta Suprema Corte de Justicia.

Por auto del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, el Presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión hecho valer en representación del Presidente de la República y desechó por improcedente el interpuesto por el

Secretario de Hacienda y Crédito Público; además, ordenó dar al Procurador General de la República la intervención que a su representación corresponde.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló el pedimento número VI-257/97, en el sentido de que se confirme la sentencia impugnada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpone en contra de la sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo y subsiste en el recurso el problema relativo a la constitucionalidad de dicho ordenamiento.

Es pertinente señalar que en la demanda de amparo, también se señalaron como actos reclamados el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo y el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, ambos expedidos por el Presidente de la República, actos cuyo conocimiento compete originalmente a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia; sin



embargo, el mencionado Decreto no es materia del presente recurso de revisión, ya que en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito dictó el sobreseimiento en el juicio, sin que la quejosa se haya inconformado al respecto, y tocante al citado Reglamento, se advierte que las violaciones que se aducen se encuentran íntimamente relacionadas con las expresadas en contra de la ley, por lo que a fin de resolver en su totalidad la cuestión jurídica planteada, en observancia del principio de celeridad procesal que establece el artículo 17 de la Carta Magna, este Tribunal Pleno decide ejercer su facultad de atracción para conocer del referido Reglamento, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, antepenúltimo párrafo, constitucional y correlativamente en el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo.

CORTE DE
A NACIÓN
DE ACUERDO

SEGUNDO. Las consideraciones de la sentencia recurrida son las siguientes:

"PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 36, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo número 1/1994 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"SEGUNDO. El Procurador Fiscal de la Federación, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Subtesorero de Operación, en ausencia del Tesorero de la Federación, y la Administradora

"Central de lo Contencioso, en ausencia del
 "Administrador General de Recaudación, al rendir
 "sus informes con justificación NIEGAN la
 "existencia del acto que se les atribuye,
 "consistente en la recepción de la primera
 "declaración provisional del impuesto al activo,
 "que por el mes de enero de mil novecientos
 "noventa y siete, fue representada en Banamex,
 "sociedad anónima, el diecisiete de febrero de mil
 "novecientos noventa y siete.

"Sin que la parte quejosa haya aportado prueba
 "alguna para desvirtuar tales negativas, procede
 "sobreser en el presente juicio de garantías,
 "respecto de los actos señalados y atribuidos, a
 "estas autoridades, con fundamento en el artículo
 "74, fracción IV, de la Ley de Amparo.



"Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia
 "número trescientos diez, publicada en la página
 "doscientos nueve del Tomo VI, Materia Común, del
 "Apéndice del Semanario Judicial de la Federación
 "de mil novecientos diecisiete a mil novecientos
 "noventa y cinco, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS
 "ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."
 "(Transcribe).

"TERCERO. Son ciertos los actos del H. Congreso
 "de la Unión; Presidente Constitucional de los
 "Estados Unidos Mexicanos; Secretario de
 "Hacienda y Crédito Público; Secretario de
 "Gobernación y Director del Diario Oficial de la



Federación, consistentes, en la expedición,
"aprobación, promulgación, refrendo y publicación
"de la Ley del Impuesto al Activo, su Reglamento y
"Decreto por el que se exime del pago de diversas
"contribuciones federales y se otorgan estímulos
"fiscales, que en su primer artículo establece la
"exención total del pago del impuesto al activo, que
"se cause durante el ejercicio de mil novecientos
"noventa y siete, a los contribuyentes cuyos
"ingresos para efectos de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta en el ejercicio de mil novecientos
"noventa y seis, no hubiesen excedido de ocho
"millones novecientos mil pesos, así lo reconocen
"en sus respectivos informes con justificación, y se
"corroboraba bajo el principio jurídico de que el
"derecho no está sujeto a prueba, en términos de
"los artículos 86 y 88 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente
"a la Ley de Amparo.

"Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal
"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, consultable en la página 983, Primera
"Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación de 1988, bajo el tenor literal siguiente:
""LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA."
"(Transcribe).

"El Administrador Local de Recaudación de
"Naucalpan, quien al rendir su informe con
"justificación expresa que es cierto el acto
"consistente en la recepción de la primera

"declaración provisional del impuesto al activo
"correspondiente al mes de enero, presentada por
"la quejosa ante la institución bancaria autorizada.

"CUARTO. Previo a la transcripción y estudio de
"los conceptos de violación, sea que las partes la
"aleguen o no, debe examinarse la procedencia de
"la acción de amparo, por ser de orden preferente
"sobre aquel aspecto, de acuerdo con la última
"parte del artículo 73, de la ley de la materia.

"Apoya a lo anterior la jurisprudencia número
"ochocientos catorce, publicada en la página
"quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, Materia
"Común, Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación 1917-1995, de texto:

"**"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO
"DE AMPARO."** (Transcribe).

"El Procurador Fiscal de la Federación, en
"representación del Presidente de la República y
"del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
"invocan las causales de improcedencia
"contenidas en el artículo 73, fracciones V y VI, de
"la Ley de Amparo.

"Dichas autoridades mencionan que la obligación
"de pagar ese tributo, no deriva del decreto por el
"que se exime del pago de diversas contribuciones
"federales y se otorgan estímulos fiscales,
"publicado en el Diario Oficial de la Federación el
"veinticuatro de diciembre de mil novecientos
"noventa y seis, sino de la Ley del Impuesto al
"Activo, la cual quedó firme al haberla consentido.



SUPREMA
COURT OF JUSTICE
SECRETARÍA DE JUSTICIA



CORTE DE
LA NACION
DEL EL ACUERDO

Aducen que el representante legal de la empresa
quejosa, admite en su demanda que venía
"cumpliendo las obligaciones fiscales a su cargo
"derivadas de la Ley del Impuesto al Activo
"conforme al sistema vigente hasta el treinta y uno
"de diciembre de mil novecientos noventa y seis y
"siendo válida esa confesión se está en presencia
"del consentimiento de la ley y reglamento
"impugnados, porque no los combatió dentro del
"término que señala dicho numeral; que no es
"cierto que la declaración que se anexa configure
"un acto de aplicación de la ley conforme a su texto
"reformado, pues es claro que no todos los
"preceptos que reclama fueron objeto del decreto
"que contienen la ley antes descrita.

"De conformidad con tales argumentos este
"Juzgado de Distrito analiza las causales previstas
"en las fracciones XI, XII y XVIII del artículo 73, en
"relación con el diverso 80 de la Ley de Amparo,
"por lo siguiente:

"Respecto a las dos primeras causales de
"improcedencia, cabe mencionar:

"La empresa quejosa, por conducto de su
"representante manifiesta que en la demanda que
"el primer acto de aplicación de la ley reclamada
"deriva de la vigencia de la reforma a la misma,
"acaecida el treinta de diciembre de mil
"novecientos noventa y seis; mismo que se suscitó
"el diecisiete de febrero de mil novecientos
"noventa y siete, fecha en la que la quejosa

"presentó la declaración de pago provisional por el
"impuesto al activo.

"La última reforma incorporada a la Ley del
"Impuesto al Activo, anterior a la que inició su
"vigencia el treinta de diciembre de mil novecientos
"noventa y seis, es la publicada en el Diario Oficial
"de la Federación el diez de mayo de mil
"novecientos noventa y seis, vigente a partir del día
"siguiente al de su publicación; por ello, la
"obligatoriedad de los artículos 2º, 3º, 5º y 9º, de la
"Ley del Impuesto al Activo, rige la situación de la
"quejosa a partir de la fecha últimamente
"mencionada.

"Pues bien, tomando en consideración que los
"artículos 2º, 3º, 5º y 9º, de la Ley del Impuesto al
"Activo, ya estaban en vigor para el diecisiete de
"febrero de mil novecientos noventa y siete, fecha
"en que la empresa quejosa presentó la
"declaración del pago provisional correspondiente,
"en cuyo rubro relativo al impuesto al activo
"declaró la cantidad de \$212,592.00 (DOSCIENTOS
"DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS).
"Sin embargo, no se configuran ninguna de las dos
"causales previstas en las fracciones XI y XII como
"menciona la autoridad responsable, toda vez que
"como se advierte de la copia certificada del
"formato para pagos provisionales, parcialidades y
"retenciones de impuestos federales, que fue
"presentada el diecisiete de febrero de mil
"novecientos noventa y siete, la cual se hace





"consistir como primer acto de aplicación de los
 "artículos 2º, 3º, 5º y 9º, de la Ley del Impuesto al
 "Activo, sin que obren en autos constancia que
 "permita a este juzgado establecer que se dictó o
 "ejecutó un acto previo de ejecución de los
 "numerales impugnados, que no fueron
 "reformados, adicionados o modificados por el
 "último de los decretos mencionados.

"Si la demanda de garantías fue presentada por el
 "representante legal de la empresa quejosa el once
 "de marzo de mil novecientos noventa y siete, es
 "evidente que entre ambas fechas no transcurrió
 "más del término legal de quince días para
 "presentar la demanda de amparo, como lo
 "establece el precepto legal 21 de la Ley de
 "Amparo.

CORTE DE
 LA NACION
 AL SEÑOR AGUERO

"Siendo irrelevante que las autoridades manifiesten
 "que la promovente del amparo, admite en forma
 "genérica en su demanda de garantías que cumplía
 "con el impuesto al activo conforme al sistema
 "vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, toda vez
 "que tales autoridades debieron de acreditar
 "fehacientemente que se configuraba dicha causal,
 "la cual no justificó.

"Al respecto, resulta aplicable la tesis de
 "jurisprudencia número doscientos ochenta y
 "cuatro, de la anterior Segunda Sala de la Suprema
 "Corte de Justicia de la Nación, impresa en la
 "página ciento noventa y uno, del Tomo VI, Común,

"del último Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación, que dice:

**"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE
"PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN
"PRESUNCIONES." (Transcribe).**

"Respecto a la diversa causal de improcedencia
"prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en
"relación al diverso 80 de la Ley de Amparo, se
"actualiza, en relación con el Decreto del Ejecutivo
"Federal, por lo siguiente:

"La expedición del decreto por el que se otorgan
"estímulos fiscales en diversas contribuciones,
"publicado en el Diario Oficial de la Federación el
"veinticuatro de diciembre de mil novecientos
"noventa y seis, en su artículo 1º, establecía
"exención total del pago del impuesto al activo que
"se cause durante el ejercicio de mil novecientos
"noventa y siete, a los contribuyentes cuyos
"ingresos para efectos de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta en el ejercicio de mil novecientos
"noventa y seis, no hubiesen excedido de OCHO
"MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS.

"De la lectura del capítulo de actos reclamados, se
"advierde que se señalaron actos de carácter
"positivo, como es la expedición del decreto
"descrito.

"La naturaleza de este acto reclamado es de
"carácter positivo, pues el efecto del amparo, en
"caso de resultar fundado algún concepto de
"violación, en términos de lo dispuesto por el



SECRETARÍA DE
JUSTICIA DE
FEDERACIÓN



artículo 80 de la Ley de Amparo, sería restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, lo que impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal en los términos del citado precepto.

En efecto, la concesión del amparo, podría consistir en no pagar el tributo, o bien en que se le incluyera en la exención del pago del impuesto, pero tal conclusión es antijurídica por incongruente, pues basta considerar que si se aborda el análisis de la constitucionalidad del decreto y se llegara a estimar que es contrario a la Constitución, el efecto del amparo no podría consistir en lo que pretende la quejosa, esto es, que quede relevada del pago del impuesto, ya que la protección que pudiera otorgar este Juzgado de Distrito no podría constituir un derecho en favor del quejoso, con la sentencia de amparo, fundándose en un acto contrario a la Constitución. Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número noventa y dos, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuatro, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice:

""CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY."
(Transcribe).

LOS JEFES DE
CORTES DE
LA NACION
DEL DE ACUERDO

"Por ello, la pretensión de que el efecto del amparo
 "sea la inclusión de la quejosa en la exención
 "establecida en el decreto reclamado, es ilógica
 "toda vez que la obligación de pago del impuesto
 "deriva de la ley que lo establece, no del acto
 "reclamado, de tal manera que al no formar parte
 "del mismo ordenamiento la obligación de pago y
 "la exención, la inconstitucionalidad que, es su
 "caso, se decretara respecto de esta última no
 "traería como consecuencia la extinción de la
 "obligación tributaria en tanto que, como ya se dijo,
 "el efecto de la concesión del amparo se traduciría
 "en volver las cosas al estado en que se
 "encontraban, es decir, dejar insubsistente el
 "decreto sin que ello produzca beneficio alguno
 "para la quejosa.



"En estas condiciones, de acuerdo con lo anterior,
 "el presente juicio resulta improcedente por lo que
 "respecta al decreto referido, de conformidad con
 "lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en
 "relación con el numeral 80, de la Ley de Amparo.

"Al no existir otra causal de improcedencia
 "invocada por alguna de las partes y por no
 "advertir este juzgado alguna diversa, procede
 "entrar al análisis de fondo del presente asunto,
 "respecto a la constitucionalidad de los artículos
 "1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 9º, de la Ley del Impuesto al
 "Activo.

"QUINTO. El representante legal de la empresa
 "quejosa, aduce como conceptos de violación los



que obran de las fojas seis a veintiocho de su escrito inicial de demanda.

"La quejosa argumenta esencialmente que la Ley del Impuesto al Activo, su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, son violatorios de las garantías de igualdad y equidad que consagran los artículos 1º, 13 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, aduciendo que la inconstitucionalidad de estos ordenamientos se configura al momento en que se implantan similitudes y paridades en el tratamiento fiscal de sujetos que se encuentran en diferentes situaciones jurídicas y de hecho, a la vez que, en forma por demás paradójica, también establecen diferenciación entre contribuyentes que guardan igualdad legal y fáctica indudable.

"Señala, además, refiriéndose al artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, que en la especie es claro que existe el otorgamiento de un tratamiento desigual a los contribuyentes que se encuentran en un mismo plano de igualdad, pues mientras a unos se les permite la deducción de las deudas que afectan su utilidad ficta o hipotética, a los otros no se les autoriza a tomar la propia deducción, no obstante que la realidad en que la ganancia mínima presunta de estos últimos también se encuentra



**"afectada con las deudas contratadas con el
"sistema financiero o con su intermediación.**

**"Ahora bien, el artículo 5º, segundo párrafo, de la
"Ley del Impuesto al Activo, señala:**

**"...No son deducibles las deudas contratadas con
"el sistema financiero o con su intermediación..."**

**"Dicho planteamiento fue examinado por el
"Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación, y al respecto pronunció la ejecutoria
"consultable en la página 63, del Semanario
"Judicial de la Federación, en su Gaceta, Novena
"Epoca, Tomo II, Agosto de 1995, que establece:**

**"'ACTIVO. EL ARTICULO 5º DE LA LEY DEL
"IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"EQUIDAD TRIBUTARIA." (Transcribe).**

**"Así las cosas, este juzgado hace suyo el criterio
"sustentado en dicha ejecutoria y estima que tal
"precepto viola el principio de equidad tributaria al
"considerar que las deudas contratadas con el
"sistema financiero o con su intermediación, no
"son deducibles, siendo que éstas también afectan
"la base del tributo.**

**"Además en lo que la quejosa identifica también
"como tercer concepto de violación, cita en su
"beneficio la tesis ejecutoria visible en la página
"64, del Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta, Novena Epoca, Tomo II, Agosto de 1995,
"que expresa:**

**"'ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY QUE
"REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS**



SUPREMA
CORTA DE JUSTICIA DE
LA FEDERACION
SECRETARIA GENERAL



**"PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
"TRIBUTARIA, (REFORMAS Y ADICIONES
"PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
"FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989). "**
"(Transcribe).

**"De tal manera, siendo el objeto del impuesto al
"activo la ganancia mínima o rendimiento mínimo
"presunto originado en la tenencia de activos
"destinados a actividades empresariales, es claro
"que al no prever la ley la posibilidad de desvirtuar
"esta presunción de ganancia mínima, quebranta el
"principio de proporcionalidad tributaria, pues
"ocasiona que el gravamen no sea acorde con el
"impuesto al encontrarse obligados a cubrirlo
"también quienes hayan tenido la ganancia mínima
"que se presume.**



**CORTE DE
LA NACION
VAL DE ACUERDO:**

**"Por las anteriores consideraciones expuestas y
"por los criterios que se han invocado los cuales
"revelan la inconstitucionalidad de la ley que
"establece el tributo porque quebranta el principio
"de equidad, por una parte, y el de
"proporcionalidad, por otra.**

**"Eso es suficiente para estimar que la declaratoria
"de inconstitucionalidad debe recaer sobre la ley,
"pues los vicios que se han puesto de manifiesto
"afectan la totalidad del sistema tributario creado
"por ello, ya que amen de lo que dispongan los
"restantes preceptos no podrá superarse la
"inequidad y desproporcionalidad producida por
"los que aquí se analizaron.**

**"Por ende, se estima también innecesario examinar
"el resto de los conceptos de violación, pues
"cualquiera que fuera su resultado no variaría la
"conclusión alcanzada.**

**"En esas condiciones, se debe conceder el amparo
"y protección a la empresa quejosa INDUSTRIA
"MEXICANA DEL ALUMINIO, sociedad anónima de
"capital variable, respecto de la Ley del Impuesto al
"Activo y su Reglamento, las reformas de ambos y
"los demás actos."**

TERCERO. En representación del Presidente de la República se hicieron valer los siguientes agravios:

**"PRIMERO. Violación a lo dispuesto por los
"artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación
"con los diversos 74, fracción III y 73, fracción V y
"último párrafo, del mismo ordenamiento legal, por
"inobservancia de los mismos, toda vez que en la
"sentencia que se recurre el C. Juez del
"conocimiento omitió realizar un estudio minucioso
"de las causales de sobreseimiento que se hicieron
"valer en el informe justificado.**

**"En efecto, en la resolución que se recurre, el A
"quo debió sobreseer respecto del artículo 5º de la
"Ley del Impuesto al Activo, toda vez que la
"amparista no demostró estar ubicada en los
"supuestos del mismo, a fin de acreditar su interés
"jurídico para impugnarlo.**





A mayor abundamiento, para estar legitimada a fin
"de impugnar el artículo 5° en comento, la quejosa
"debió demostrar ubicarse en los supuestos a que
"el mismo se refiere, esto es, debió acreditar la
"circunstancia real de tener deudas contratadas
"con el sistema financiero, a fin de dejar claro que
"dicho dispositivo le causa un agravio personal y
"directo, lo cual no hizo, pues no demostró tener
"las deudas antes citadas.



CORTE DE
LA NACION
DEL DE ACUERDOS

"En otras palabras, si bien en determinado
"momento un particular puede demostrar que es
"sujeto del impuesto al activo, con ello no
"necesariamente acredita ubicarse bajo los
"supuestos del artículo 5° de la ley de la materia,
"pues para ello para demostrar que dicho
"dispositivo le agravia, debe dejar claro que tiene
"deudas contratadas con el sistema financiero que
"no pueda hacer deducibles. Dicho de otra manera,
"si la quejosa no tenía contratada la clase de
"deudas que se analiza, resulta por demás evidente
"que el hecho de que el dispositivo legal reclamado
"no permita deducirlas para efectos del pago del
"impuesto al activo, no causa agravio alguno a la
"amparista, pues ésta no tiene esta clase de
"deudas.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que
"textualmente establece:

"INTERES JURIDICO DEL QUEJOSO EN EL
"AMPARO CONTRA LEYES. DEBE DEMOSTRARSE
"PLENAMENTE. Según los lineamientos

"constitucionales y del juicio de amparo que se
 "refieren a los principios que norman el amparo
 "contra leyes, no es suficiente la calidad de
 "mexicanos y residentes de un Municipio o Estado
 "para comprobar el interés jurídico en impugnar
 "una ley y tampoco basta que los quejosos
 "manifiesten poseer determinada calidad, sino que
 "debe demostrarse plenamente el interés jurídico
 "por parte de aquéllos por medio de las pruebas
 "que admite la legislación de la materia; y si
 "afirman que son profesionistas y que por ello se
 "encuentran obligados a pagar un impuesto
 "establecido en la ley que combaten, deben
 "acreditar plenamente que se dedican a esa
 "actividad y no por la circunstancia de que las
 "autoridades aplicadoras negaron los actos
 "reclamados en la forma en que fueron
 "planteados."

"Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
 "1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, página
 "861.

"De acuerdo con lo anterior, resulta claro que al no
 "demostrar tener deudas contratadas con el
 "sistema financiero, supuesto contenido en el
 "artículo 5º impugnado, la amparista no acreditó su
 "interés jurídico para reclamarlo en el presente
 "juicio de garantías, circunstancia que
 "indebidamente desestimó al A quo en la sentencia
 "que se recurre, razón por la cual lo procedente es



**"Revocarla y negar el amparo y protección de la
Justicia Federal.**

**"SEGUNDO. Violación a lo dispuesto por los
"artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por
"inobservancia de los mismos.**

**"Se causa el agravio que se hace valer, toda vez
"que el A quo no analizó debidamente la mecánica
"general de causación del impuesto al activo, al
"considerar que dicho tributo no da un tratamiento
"igual a quienes se encuentran en la misma
"situación, concluyendo por tanto que es
"inequitativo, todo lo cual es infundado en atención
"a lo siguiente:**



CORTE DE
NACIONES
DE ACUERDO

**"El artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, no
"viola el principio de equidad tributaria porque no
"trata en forma desigual a los iguales, ya que la
"imposibilidad de deducir deudas contratadas con
"el sistema financiero se aplica por igual a todos
"los contribuyentes que se ubiquen en la misma
"hipótesis normativa.**

**"Dicha circunstancia no resulta inequitativa, toda
"vez que la imposibilidad de deducir las deudas
"señaladas se aplica a todos los contribuyentes
"por igual, sin hacer distinción entre los sujetos
"obligados, es decir, no establece que las deudas
"contratadas con el sistema financiero podrán ser
"deducidas por determinados contribuyentes y no
"podrán serlo por otros, lo cual sí resultaría
"inequitativo.**

"En otras palabras, la prohibición de deducir las
"deudas en cuestión es de carácter general, lo cual
"no conlleva una transgresión al principio de
"equidad, pues de la lectura del artículo 5º de la ley
"reclamada se desprende que todos los
"contribuyentes se encuentran en la misma
"situación, y por tanto, en la misma imposibilidad
"de deducir ciertas deudas y de gozar el mismo
"derecho para deducir otras.

"Además, la prohibición de deducir las citadas
"deudas, se debe a que de permitirse la situación
"contraria, es decir, que las deudas contratadas
"con el sistema financiero sean deducibles, se
"estaría permitiendo que los contribuyentes a
"través de un mecanismo sencillo de elusión,

"evadieran el pago del impuesto, ya que en primer término capitalizarían sus utilidades, las cuales se



SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARIA GEA

"encuentran ubicadas dentro del pago del impuesto
"al activo, y las depositarían en la institución
"financiera, aunque al mismo tiempo solicitarían a
"tal organismo un préstamo por la misma cantidad
"que fue objeto del depósito, logrando que la
"cantidad prestada sea deducible, lo que vendría a
"nulificar el cobro del tributo que nos ocupa.

"Por lo antes expuesto, resultan infundadas las
"argumentaciones relativas del A quo, por lo que
"procede revocar la sentencia que se recurre y
"negar a la quejosa el amparo y protección de la
"Justicia Federal.



TERCERO. Violación a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por inobservancia de los mismos.

"Se causa el agravio que se hace valer, toda vez que el A quo no analizó debidamente la mecánica general de causación del impuesto al activo, al considerar que dicho tributo grava una presunta ganancia mínima, sin posibilidad de desvirtuar la presunción de la misma, concluyendo por ello que el mismo resulta desproporcional.

"En efecto, al resolver el juicio en cuestión, el Juez del Conocimiento soslayó que del análisis del los artículos 1º y 2º del ordenamiento legal declarado inconstitucional, se desprende claramente que los contribuyentes están obligados al pago del impuesto al activo "por el activo que tengan", de manera que no hay razón jurídica válida para concluir que el tributo se paga por una "ganancia mínima presunta".

"En el caso que nos ocupa, el legislador planteó la necesidad de establecer un tributo que fungiera como control del impuesto sobre la renta, ya que a través de mecanismos evasivos o elusivos, tales como los llamados "precios de transferencia" (por medio de los cuales empresas generadoras de utilidades las transfieren a otras que nos las producen), la mayoría de los contribuyentes con actividades empresariales reportaban pérdida fiscal en el impuesto sobre la renta, aún y cuando



CORTE DE
LA NACION
L DE ACUERDO

"contaba con activos para generar dichas utilidades.

"En tal sentido, al establecer los elementos esenciales del tributo y para considerar que el impuesto sería igual al resultado de aplicar la tasa del 1.8% sobre la base gravable sobre el valor de los activos, siendo la tenencia de dichos activos su objeto, el legislador diseñó el impuesto al activo a partir de la utilidad que generan los activos productivos de una empresa, calculados sobre un porcentaje que permitiera la existencia de utilidades suficientes para cubrir el ISR. Para llegar a este último resultado, la tasa del impuesto se calculó contablemente con base en un rendimiento del 5.5% que debe generar todo activo productivo.



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

"De esta manera, para evitar nuevos esquemas elusivos fue necesario gravar no sólo a las empresas por sus activos, sino a quienes les proporcionaban dichos activos, aunque no fueran empresas, ya que a través de mecanismos de planeación fiscal y con la finalidad de no haber gravados sus activos, ciertas empresas "colocaban" fuera de su patrimonio para ser arrendados por personas físicas o morales no empresarias. Asimismo, mediante reformas al régimen de este impuesto, y con la finalidad de no afectar a los arrendadores no empresarios, se permitió que el valor de los activos arrendados fuera determinado dentro de la base gravable de la



*empresa arrendataria y no en la del arrendador,
"quien quedaba libre de toda obligación fiscal.*

*"Sin embargo, lo anterior no implica que el tributo
"en cuestión grave, como lo consideró el A quo,
"basándose en una tesis y sin verter argumentos
"jurídicos, una ganancia ficta o utilidad presunta,
"en virtud de que en ninguna de sus partes la ley
"en comento contiene dicha aseveración, lo cual
"sería suficiente para desestimar los argumentos
"del juzgador, además de que la ley expresa con
"absoluta claridad que el objeto del impuesto lo es
"la simple tenencia y su base gravable lo es su
"valor. En este sentido, no deben confundirse los
"razonamientos técnicos relativos a la causación
"del tributo que nos ocupa con el análisis jurídico
"de los elementos esenciales del mismo, pues de
"dicho estudio se desprende que el hecho de la
"detentación de activos se traduce, con absoluta
"certeza, en un signo de riqueza, circunstancia que
"no constituye una presunción sino un hecho real y
"concreto, pues de otra manera, tratándose de
"presunciones o ficciones, no sería posible aplicar
"ajustes, actualizaciones, deducciones e incluso el
"acreditamiento con el impuesto sobre la renta.*

*"En este orden de ideas, el hecho (real y jurídico)
"de que el impuesto al activo sea "complementario
"del impuesto sobre la renta, no significa que sea
"accesorio, ya que de lo contrario, sí gozaría de
"la misma naturaleza jurídica de éste. En este
"caso, si el tributo en cuestión es sólo*

CORTE DE
NACIONAL
DE ACUERDO

"complementario y no accesorio del impuesto
 "sobre la renta, no puede -jurídicamente- seguir la
 "suerte de este último impuesto. En otras palabras,
 "se trata de contribuciones diferentes y, por lo
 "mismo, en su análisis de validez constitucional no
 "debe confundirse la naturaleza de su interrelación.
 "Por lo anterior, la resolución del A quo, en el
 "sentido de que se viola el principio de
 "proporcionalidad, al no prever la posibilidad de
 "desvirtuar la presunción de ganancia mínima,
 "supuesto objeto del gravamen, y
 "consecuentemente no tomar la capacidad
 "económica de los contribuyentes, carecen de
 "soporte jurídico por las razones apuntadas, pues
 "la contribución declarada inconstitucional no
 "grava la supuesta "presunción de ganancia
 "mínima". Aún más, la "posibilidad de
 "desvirtuarla", a que se refiere el A quo sí resultaría
 "jurídicamente ineficaz, pues en caso de
 "demostrarse que las pérdidas declaradas son
 "improcedentes, tendría que modificarse la utilidad
 "fiscal en el impuesto sobre la renta.
 "Al respecto, cabe aclarar que el acreditamiento
 "establecido por el artículo 9º de la Ley del
 "Impuesto al Activo de las Empresas no
 "contraviene precepto constitucional alguno, toda
 "vez que no se grava la ganancia mínima presunta
 "del contribuyente sino el valor de sus activos, por
 "lo que con él se pretende evitar un doble pago del
 "impuesto sobre los beneficios económicos de un



SUPREMA
 JUSTICIA I
 SECRETARIA DE



"contribuyente, y al mismo tiempo, impedir que
 "mediante mecanismos de planeación fiscal, los
 "particulares evadan el pago de dicho impuesto al
 "esconder sus utilidades mediante la obtención de
 "activos, razón por la cual resultan infundadas las
 "afirmaciones del A quo, por lo que procede
 "revocar la resolución recurrida y negar a la
 "quejosa el amparo de la Justicia de la Unión.

"Resulta aplicable al respecto la tesis de
 "jurisprudencia P/J.11/96, visible en la página 5 del
 "Semanario judicial de la Federación y su Gaceta,
 "Novena Epoca, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunal
 "Pleno, que textualmente indica:



CORTE DE
 LA NACION
 SAL DE ACUERDO

"ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA
 "CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE
 "LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR
 "QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS,
 "CONCURRENTES A LA OBTENCION DE
 "UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD
 "CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE
 "ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES
 "(CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS
 "EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL.

"Del contenido de los artículos 25, 28 y 31, fracción
 "IV, de la Constitución y, específicamente, de los
 "artículos 1º, 6º, 9º y 10 de la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas (Diario Oficial de la
 "Federación del 31 de diciembre de 1988) y de la
 "exposición de motivos de la iniciativa
 "correspondiente resulta que para examinar la

*"constitucionalidad de los preceptos de este
 "cuerpo legal es imprescindible considerar que, si
 "bien de la literalidad de su artículo 1º, el objeto de
 "la contribución radica en el "activo" de las
 "empresas, de los demás preceptos que integran el
 "sistema del tributo, se infiere que dicho objeto se
 "encuentra íntimamente vinculado a que dichos
 "activos sean susceptibles de concurrir a la
 "obtención de utilidades, signo de capacidad
 "contributiva que el legislador necesariamente
 "debe tomar en cuenta como presupuesto esencial
 "de toda contribución y que, además, del fin
 "estrictamente fiscal de recaudar recursos para los
 "servicios públicos que exige la fracción IV del
 "artículo 31 de la Constitución, persigue la finalidad
 "fiscal de contar con un medio eficaz de control en
 "el pago que por impuesto sobre la renta
 "corresponda a los sujetos pasivos, así como la
 "finalidad extrafiscal de estimular la eficiencia de
 "los mismos en el desarrollo de sus actividades
 "económicas."
 "Por todo lo antes expuesto, resultan infundadas
 "las argumentaciones relativas del A quo, por lo
 "que procede revocar la sentencia que se recurre y
 "negar a la quejosa el amparo y protección de la
 "Justicia Federal."*



CUARTO. En principio; resulta pertinente realizar las siguientes precisiones:



De la respectiva demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama la Ley del Impuesto al Activo publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, así como sus reformas contenidas en los decretos publicados en el mismo Diario correspondiente a los días veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; y el Decreto emitido por el Presidente de la República por el que otorga estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el mencionado Diario del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis; habiendo indicado como acto de aplicación de las mencionadas disposiciones la presentación de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, realizada ante Banamex, sociedad anónima, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuya copia fotostática certificada obra a fojas 117 a 118 del expediente de amparo, existiendo también a fojas 146 a 149 de esos autos, copia fotostática certificada de la declaración anual de ese tributo por el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, presentada hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete

DETE DE
A NACIÓN
EL ACUERDO

(después de que presentó su demanda de garantías, lo que sucedió el diez de marzo anterior).

Asimismo, de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa realiza afirmaciones genéricas en cuanto a que reclama todas las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo hasta su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, de la lectura integral de esa demanda se desprende que sólo precisa tal impugnación en relación con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, párrafo segundo, y 9º, de esa ley, de cuya alegada inconstitucionalidad a su vez hace depender la del mencionado reglamento, esgrimiendo argumentos propios en cuanto al referido decreto presidencial, siendo la nota común de las argumentaciones jurídicas expuestas en los conceptos de violación, que atacan el establecimiento mismo del impuesto al activo, pues a través de ellos se aduce que en la determinación de algunos de los elementos esenciales de ese tributo se infringen los principios constitucionales que deben regir a las contribuciones y que el Congreso de la Unión carece de facultades para establecer tal impuesto.

Ahora bien, de la sentencia recurrida destaca que el Juez de Distrito, en el primer punto resolutivo, decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del considerando segundo, respecto de los actos atribuidos al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Tesorero de la Federación y Administrador General de Recaudación de la citada Secretaría, que se hicieron consistir en la recepción de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondientes a enero de mil novecientos



noventa y siete; que también, en el primer punto resolutive declaró el sobreseimiento, según lo que expuso en el considerando cuarto, respecto de los actos vinculados con el mencionado decreto presidencial; y en el segundo resolutive, en términos del considerando quinto, declaró la inconstitucionalidad del sistema del impuesto al activo mediante la aplicación de las tesis identificadas con los números XLV/95 y XLVI/95, cuyos respectivos rubros son: "ACTIVO. EL ARTICULO 5º DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." y "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)."

RTE DE
NACIONAL
E ACUERDO

También es necesario señalar que el presente recurso de revisión fue interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República, y que en él se hacen valer agravios, por una parte, encaminados a poner de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo y, por otra, en contra de las consideraciones que condujeron al juzgador federal a otorgar la protección de la Justicia de la Unión.

Las anteriores precisiones revelan que no es materia de la presente instancia constitucional el sobreseimiento que el Juez de Distrito decretó en el primer punto resolutive de su fallo, en términos de los considerandos segundo y cuarto, respecto de los actos atribuidos al Secretario de Hacienda y Crédito Público,

Tesorero de la Federación y Administrador General de Recaudación de la citada Secretaría, que se hicieron consistir en la recepción de la declaración de pago provisional del impuesto al activo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, y tocante al Decreto emitido por el Presidente de la República por el que otorga estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Tal postura dimana de la circunstancia de que ese punto resolutivo y las consideraciones que lo sustentan no agravan a la autoridad responsable recurrente, mientras que la quejosa, a la que en todo caso pudiera parar perjuicio, no interpuso el recurso de revisión, por lo que no es dable realizar un análisis sobre el particular, en tanto la instancia de revisión se abre sólo a petición de parte agraviada y no de manera oficiosa.

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN

Es ilustrativa de lo expuesto, la jurisprudencia número 20/91 de la Tercera Sala de la anterior integración de este Tribunal Supremo, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Abril, página 26, cuya sinopsis es del siguiente tenor:

**"REVISION. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO
"EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA
"RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE
"A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una
"sentencia existe diverso resolutivo sustentado en
"las respectivas consideraciones que no afectan a
"la parte recurrente y no son combatidas por quien**



**"le pudo afectar, debe precisarse que no son
"materia de la revisión dichas consideraciones y
"resolutivo."**

QUINTO. Una vez que ha quedado determinada la materia del presente recurso de revisión, debe abordarse el examen del primero de sus agravios, en el que se cuestiona la procedencia del juicio de garantías respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.

La autoridad recurrente aduce que el Juez de Distrito violó lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque no realizó un estudio de la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, sustentada en que la quejosa no acreditó que el artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo afecte su interés jurídico, porque no demostró encontrarse en la hipótesis que establece, es decir, que tenga deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.

Sobre el particular, es pertinente precisar que del informe justificado rendido en representación del Presidente de la República, que obra a fojas 49 a 92 del expediente de amparo, se desprende que se invocó la referida causa de improcedencia, mientras que de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito no se pronunció al respecto, pero tal omisión debe ser reparada por este Tribunal Pleno, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece una de las reglas que deben seguirse en el estudio del recurso de revisión, ilustrando en cuanto a que han de examinarse los

agravios aducidos y, cuando se estimen fundados, deben considerarse los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, lineamiento que interpretado sistemáticamente con lo dispuesto por la fracción III del citado precepto legal y con el artículo 73, último párrafo, de la legislación de la materia, autoriza a que de considerarse fundada la omisión alegada por el recurrente, respecto del examen de una causa de improcedencia invocada en el informe justificado rendido por alguna de las autoridades responsables o en cualquier actuación, por alguna de las otras partes, en reparación de tal violación, se estudie la cuestión, dado que el examen de la procedencia de la acción constitucional debe examinarse aun de oficio en cualquiera de las instancias del juicio.

Es fundado el argumento de improcedencia que la autoridad responsable hace valer:



SUPLENTE
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE

A fin de ilustrar tal aserto, es necesario tener en consideración que la quejosa alega que la precisada disposición es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al prohibir la deducción de deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual, porque los distingue en función de la calidad de su acreedor.

Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con



las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.

Ahora bien, el citado artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

**"ARTICULO 5º. Los contribuyentes podrán deducir
"del valor del activo en el ejercicio, la deudas
"contratadas con empresas residentes en el país o
"con establecimientos permanentes ubicados en
"México de residentes en el extranjero, siempre
"que se trate de deudas no negociables. También
"podrán deducirse las deudas negociables en tanto
"no se le notifique al contribuyente la cesión del
"crédito correspondiente a dichas deudas a favor
"de una empresa de factoraje financiero. Y aun
"cuando no habiéndosele notificado la cesión el
"pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a
"cualquier otra persona no contribuyente de este
"impuesto. No son deducibles las deudas
contratadas con el sistema financiero o con su
intermediación"**




CORTE DE
LA NACION
JAL DE ACUERDO

De esta disposición legal se desprende que autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y les prohíbe deducir aquéllas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.

De esta guisa resulta que a efecto de acreditar plenamente el interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías el

artículo 5°, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

Para avalar tal postura es necesario reconocer que existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.


 SUPREMA (C)
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA GENERAL

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquéllas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable; puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del



tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

En este caso se encuentra el artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquéllos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.

En ese orden de ideas, no basta que la quejosa demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría darse el caso de que el quejoso tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al

permitirle en el futuro contratar esa clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

En esta tesitura, lo expuesto lleva a concluir que tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la quejosa no demostró tener deudas contratadas con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.

Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3ª.CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-septiembre, Octava Epoca, Tercera Sala, cuyo rubro es **"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTICULO 5º DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCION DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACION"**, en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, se infiere que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5º,



párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.

Las consideraciones que anteceden revelan que el agravio esgrimido por la autoridad recurrente es fundado en cuanto a que respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

SEXTO. Como se precisó en el considerando cuarto de esta ejecutoria, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito otorgó el amparo al tenor de la aplicación de las tesis XLV/95 y XLVI/95, de este Tribunal Pleno que se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 5º y 9º de la Ley del Impuesto al Activo; respecto del primer precepto legal, en el considerando que antecede, ya se determinó, con base en los agravios esgrimidos por la autoridad responsable, que el juicio de garantías resulta improcedente y tocante del segundo de éstos, se advierte, de oficio, que el juicio también es improcedente, por la razón que más adelante se precisará.

Es importante destacar que cuando en la revisión se advierte la existencia de una causa de improcedencia, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en

cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Para poner de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 9° de la Ley del Impuesto al Activo, es pertinente partir de la base de que éste reviste la naturaleza de una norma heteroaplicativa.

Al respecto, los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales,



para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.

Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

Este Tribunal Pleno ha precisado las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, en la actualmente jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, correspondientes al mes de abril de 1996, cuya sinopsis es la siguiente:

**"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y
"HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN
"EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION
"INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación considera
"que para distinguir las leyes autoaplicativas y**

"heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de
 "individualización incondicionada de las mismas,
 "consustancial a las normas que admiten la
 "procedencia del juicio de amparo desde el
 "momento que entran en vigor, ya que se trata de
 "disposiciones que, acorde con el imperativo en
 "ellas contenido, generan perjuicio al gobernado
 "desde el inicio de su vigencia, en virtud de que
 "crean, transforman o extinguen situaciones
 "concretas de derecho. El concepto de
 "individualización constituye un elemento de
 "referencia objetivo para determinar la procedencia
 "del juicio constitucional porque permite conocer,
 "en cada caso concreto, si los efectos de la
 "disposición legal impugnada ocurren en forma
 "condicionada o incondicionada; así la condición
 "consiste en la realización del acto necesario para
 "que la ley adquiera individualización, que bien
 "puede revestir el carácter de administrativa o
 "jurisdiccional, e incluso, comprende el acto
 "jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan
 "dentro de la hipótesis legal. De esta manera,
 "cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen
 "con ella misma, independientemente de que no se
 "actualice condición alguna, se estará en
 "presencia de una ley autoaplicativa o de
 "individualización incondicionada; en cambio
 "cuando las obligaciones de hacer o de no hacer
 "que impone la ley, no surgen en forma automática
 "con su sola entrada en vigor, sino que se requiere



SUPREMA
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA GENERAL



**"para actualizar el perjuicio, de un acto diverso
"que condicione su aplicación, se tratará de una
"disposición heteroaplicativa o de individualización
"condicionada, pues la aplicación jurídica o
"material de la norma, en un caso concreto, se
"halla sometida a la realización de ese evento".**

Ahora bien, el texto del precepto legal en comento es el siguiente:

**"ARTICULO 9º. Los contribuyentes podrán
"acreditar contra el impuesto del ejercicio una
"cantidad equivalente al impuesto sobre la renta
"que les correspondió en el mismo, en los
"términos de los títulos II ó II-A, o del capítulo VI
"del título IV de la ley de la materia. ----
"Adicionalmente, los contribuyentes podrán
"acreditar contra el impuesto del ejercicio, la
"diferencia que resulte en cada uno de los tres
"ejercicios inmediatos anteriores conforme al
"siguiente procedimiento y hasta por el monto
"que no se hubiera acreditado con anterioridad.
"Esta diferencia será la que resulte de disminuir
"al impuesto sobre la renta causado en los
"términos de los Títulos II o II-A o del Capítulo VI
"del Título IV de la Ley de la Materia, el impuesto
"al activo causado, siempre que este último sea
"menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para
"estos efectos, el impuesto sobre la renta
"causado en cada uno de los tres ejercicios**


CORTE DE
LA NACION.
SALA DE ACUERDOS

"citados deberá disminuirse con las cantidades
 "que hayan dado lugar a la devolución del
 "impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de
 "este artículo. Los contribuyentes también
 "podrán efectuar el acreditamiento a que se
 "refiere este párrafo contra los pagos
 "provisionales del impuesto al activo. --- El
 "impuesto que resulte después del
 "acreditamiento a que se refieren los párrafos
 "anteriores, será el impuesto a pagar conforme a
 "esta ley. --- Cuando en el ejercicio el impuesto
 "sobre la renta por acreditar en los términos del
 "primer párrafo de este artículo exceda al
 "impuesto al activo del ejercicio, los
 "contribuyentes podrán solicitar la devolución de
 "las cantidades actualizadas que hubieran
 "pagado en el impuesto al activo, en los diez
 "ejercicios inmediatos anteriores, siempre que
 "dichas cantidades no se hubieran devuelto con
 "anterioridad. La devolución a que se refiere este
 "párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la
 "diferencia entre ambos impuestos. --- El
 "impuesto sobre la renta por acreditar a que se
 "refiere esta ley será el efectivamente pagado. ---
 "Las diferencias del impuesto sobre la renta que
 "resulten en los términos del segundo párrafo y
 "el impuesto al activo efectivamente pagado en
 "los diez ejercicios inmediatos anteriores a que
 "se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se
 "actualizará por el periodo comprendido desde el



SUPREMA
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA GERAL



"sexto mes del ejercicio al que corresponda al
"pago del impuesto sobre la renta o el impuesto
"al activo, respectivamente, hasta el sexto mes
"del ejercicio por el que se efectúe el
"acreditamiento a que se refiere el segundo
"párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual
"el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al
"activo, según se trate. ---- Los contribuyentes de
"esta ley no podrán solicitar la devolución del
"impuesto sobre la renta pagado en exceso en
"los siguientes casos: ---- Cuando en el mismo
"ejercicio, el impuesto establecido en esta ley
"sea igual o superior a dicho impuesto. En este
"caso el impuesto sobre la renta pagado por el
"que se podría solicitar la devolución por resultar
"en exceso, se considerará como pago del
"impuesto al activo del mismo ejercicio, hasta
"por le monto que resulte a su cargo el términos
"de esta ley, después de haber efectuado el
"acreditamiento del impuesto sobre la renta a
"que se refieren el primero y segundo párrafos de
"este artículo. Los contribuyentes podrán
"solicitar la devolución de la diferencia que no se
"considere como pago del impuesto al activo del
"mismo ejercicio en los términos de esta
"fracción. ---- Cuando su acreditamiento dé lugar
"a la devolución del impuesto establecido en esta
"ley, en los términos del cuarto párrafo de este
"artículo. En este caso, el impuesto sobre la
"renta pagado en exceso cuya devolución no

MEXICANOS
CORTE DE
LA NACION.
DEL DE ACUERDOS

"proceda en los términos de esta fracción se
 "considerará como impuesto al activo para efecto
 "de lo dispuesto en el cuarto párrafo de este
 "artículo. ---- Cuando el contribuyente no efectúe
 "el acreditamiento o solicite la devolución en un
 "ejercicio, pudiéndolo haber hecho conforme a
 "este artículo, perderá el derecho a hacerlo en
 "ejercicios posteriores. ---- Los contribuyentes
 "podrán también acreditar contra los pagos
 "provisionales que tengan que efectuar el
 "impuesto al activo, los pagos provisionales del
 "impuesto sobre la renta. Cuando en la
 "declaración de pago provisional el
 "contribuyente no pueda acreditar la totalidad del
 "impuesto sobre la renta efectivamente pagado,
 "el remanente lo podrá acreditar contra los
 "siguientes pagos provisionales. ---- Las
 "personas morales que tengan en su activo
 "acciones emitidas por sociedades residentes en
 "el extranjero podrán acreditar contra el
 "impuesto al activo, el impuesto sobre la renta
 "pagado en el extranjero por dichas sociedades,
 "hasta por el monto que resulte conforme a lo
 "previsto en el segundo párrafo del artículo 6º de
 "la ley del impuesto mencionado. ---- Los
 "derechos al acreditamiento y a la devolución
 "previstos en este artículo son personales del
 "contribuyente y no podrán ser transmitidos a
 "otra persona ni como consecuencia de fusión.
 "En el caso de escisión, estos derechos se



SUPREMA
 JUSTICIA D
 SECRETARIA GEN



**"podrán dividir entre las sociedades escidente y
"las escindidas, en la proporción en que se
"divida el valor del activo de la escidente en el
"ejercicio en que se efectúa la escisión,
"determinado éste después de haber efectuado la
"disminución de las deudas deducibles en los
"términos del artículo 5º de esta ley".**

De la exposición acerca de la naturaleza jurídica de la norma reclamada, se corrobora que es heteroaplicativa, ya que por su sola vigencia no causa perjuicio a los gobernados sino que, en términos del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, requiere de un acto de aplicación para que se genere ese perjuicio y justifique, al mismo tiempo, la procedencia del juicio de amparo en su contra. Lo que acontece, según el contenido y natural aplicación de esta disposición, únicamente, cuando el contribuyente presenta la declaración anual correspondiente, ya que es en este acto cuando podrá acreditar o no contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que le correspondió en el mismo ejercicio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE
LA
GENERAL DE ACUERDOS

En estas condiciones, si para determinar el monto de la base del activo conforme al precepto reclamado, es necesaria la existencia de la declaración anual, para la procedencia del juicio de amparo promovido en contra de esta norma, resulta indispensable que en aquélla aparezca que se realizó el acreditamiento previsto en el artículo 9º, o que aquél no se llevó a cabo, porque no se actualizan los requisitos que para tal efecto señala el precepto reclamado.

Consecuentemente, el acto de aplicación del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, no se actualiza en la declaración provisional de pago del tributo correspondiente a enero de mil novecientos noventa y siete, que la quejosa acompañó a su demanda de garantías, y si bien durante la substanciación del juicio exhibió la declaración anual del ejercicio de mil novecientos noventa y seis, que obra a fojas 146 a 149 del expediente, aparece que ésta la presentó hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, esto es, más de veinte días después de que promovió el juicio, por lo que no puede revelar la procedencia del amparo, la que debe estar actualizada al momento de la presentación de la respectiva demanda, pues es en este momento en el que deben estar reunidos los requisitos que la ley señala para el ejercicio de la acción constitucional, ya que en el juicio de amparo no existe el interés sobrevenido, sino que debe existir un agravio personal, directo, definitivo y actual a la fecha de la petición de amparo, lo que además se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio.

Sobre el particular, este Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que aparece plasmado en la jurisprudencia número



visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 207, que dice:

**"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU
"APLICACION. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE
"EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN
"DE LA DEMANDA. De conformidad con lo
"dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de
"la Ley de Amparo, la acción constitucional que se
"endereza en contra de leyes reclamadas con
"motivo de su aplicación, debe presentarse dentro
"del plazo de quince días siguientes al en que se dé
"el primer acto de aplicación que cause perjuicio a
"la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia
"de que el acto concreto que genere el perjuicio
"debe ser, necesariamente, anterior a la
"presentación de la demanda, independientemente
"de que su demostración pueda realizarse durante
"la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica
"si se toma en consideración que la existencia del
"acto de aplicación, cuando se impugna una ley
"con motivo de éste, constituye un factor necesario
"para la procedencia del juicio de garantías, por lo
"que debe atenderse a la fecha en que se presentó
"la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no
"habría seguridad para las partes y la sentencia
"tendría que ocuparse de actos posteriores y
"distintos a los que dieron origen a la promoción
"del juicio."**



De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo también resulta improcedente en relación con la reclamación de inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, al actualizarse la causa prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Como consecuencia de la improcedencia del juicio de amparo respecto de los artículos 5º, párrafo segundo, y 9º de la Ley del Impuesto al Activo, en la materia de la revisión, debe revocarse la sentencia recurrida que otorgó la protección constitucional, al considerar que tales preceptos son inconstitucionales, y decretar al respecto el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, determinación que a su vez obliga a este Tribunal Pleno ha pronunciarse respecto de aquellas cuestiones que el Juez de Distrito consideró innecesario analizar ante la concesión del amparo.

No está por demás señalar que la determinación de decretar el sobreseimiento en cuanto a los artículos 5º y 9º de la Ley del Impuesto al Activo, vuelve ocioso el estudio de los agravios segundo y tercero del escrito de revisión en los que se cuestiona la concesión del amparo que con base en la inconstitucionalidad de esos preceptos había otorgado el Juez de Distrito.

SEPTIMO. Al cumplir con el propósito anunciado en la parte final del considerando que antecede, este Tribunal Pleno advierte la improcedencia del juicio de garantías en relación con el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo



referente a la categoría de contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente, respecto de cuyo tópico la quejosa hizo valer diversos argumentos en el apartado identificado con el inciso d) del segundo concepto de violación de su demanda de garantías.

Antes de abordar el tópico en comento, es necesario repetir que, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causas de improcedencia debe realizarse oficiosamente, lo que implica que pueden y deben analizarse en cualquiera de las instancias del juicio de garantías, las aleguen o no las partes, lo que autoriza a que en este recurso de revisión se examine de oficio la procedencia del juicio constitucional, incluso respecto de aquellos actos que en la sentencia recurrida se haya tenido por tácitamente actualizada y no se haga valer agravio alguno.

CORTE DE
E LA NACION.
IERAL DE ACUERDOS

Precisado lo anterior, es menester transcribir lo que establece el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo:

"ARTICULO 1º. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las

"señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes. (...)"

Importante resulta tener en cuenta que respecto del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en el apartado d) del identificado como primer concepto de violación, la quejosa expuso lo siguiente:

"d) Por último, la inequidad de la Ley del Impuesto al Activo y de su Reglamento y, con ello, la infracción de los artículos 1º, 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal se actualiza cuando en la parte final del primer párrafo del artículo 1º, de aquel ordenamiento, se consigna que: "(...) Las personas distintas de las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes." Lo anterior es así, pues el hecho de gravar a cierto tipo de sujetos en consideración al destino que den a los bienes de su propiedad, esto es, en





CORTE DE
LA NACION
REAL DE ACUERDOS

"función al otorgamiento del uso o goce de los
"mismos a los contribuyentes, con exclusión de
"otros que, aún siendo propietarios de la misma
"clase de bienes, no conceden su uso o goce
"temporal a tales personas, representa un trato
"desigual a sujetos que en realidad se encuentran
"en una idéntica situación jurídica y de hecho,
"como lo es la propiedad de bienes de igual
"naturaleza. Por ello, el establecimiento de
"diferenciaciones entre unos y otros sujetos para
"determinación de los contribuyentes obligados al
"pago del impuesto al activo, en base a un criterio
"carente de índices objetivos y de equidad, es
"decir, tan sólo a partir del destino que se dé a los
"bienes de propiedad de ellas, sin tomar en cuenta
"que lo que lógica y constitucionalmente es
"relevante, es la calidad de propietarios de tales
"bienes, lo que da lugar a que los ordenamientos
"legales reclamados sean conculcatorios de las
"garantías individuales indicadas al inicio de este
"apartado.
"Peor aún, acorde con el nuevo texto legal del
"precepto anteriormente transcrito, resulta que
"tanto el Capítulo III, del Título IV como los
"artículos 133, fracción XIII y 148-A, de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, se refieren únicamente a
"los ingresos de las personas físicas que
"correspondan al otorgamiento, a título oneroso,
"del uso o goce temporal de bienes inmuebles a
"otros contribuyentes del impuesto al activo, todo

"lo cual actualiza la transgresión de las garantías
"constitucionales en comento por los
"siguientes motivos:

"i) porque injustificadamente se excluye de este
"supuesto a las personas morales que no son
"contribuyentes del impuesto al activo y que de
"cualquier modo arriendan u otorgan, a título
"oneroso, el uso o goce temporal de bienes
"inmuebles;

"ii) porque al hacerse remisión al Capítulo III, del
"Título IV y a los artículos 133, fracción XIII y 148-A,
"de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en forma
"inexplicable sólo se incluyen actos onerosos
"_arrendamiento y, en general, otorgamiento del
"uso o goce temporal de inmuebles_ no así los que
"sean de carácter gratuito como el comodato, por
"ejemplo; y,

"iii) porque en el primer párrafo del artículo 1º de la
"ley impugnada de Inconstitucional, de manera
"caprichosa se excluye del rango de
"contribuyentes a las personas físicas, así como
"las personas morales residentes en el extranjero,
"que otorguen el uso o goce temporal de bienes
"muebles, no obstante que éstos también pueden,
"de inicio, catalogarse como "activo fijo" para
"efectos del propio ordenamiento tributario, pero
"que por la veleidosa voluntad del legislador
"federal no quedan comprendidos en el precepto
"legal de que se trata. En esa tesitura, pues,
"acreditada la violación de los artículos 1º, 13 y 31,



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA



**"fracción IV, de la Ley Fundamental, lo conducente
"es que la Justicia Federal otorgue a mi poderdante
"el amparo y protección constitucional que
"reclama."**

De las anteriores precisiones se desprende con claridad que la quejosa pretende cuestionar la constitucionalidad del régimen establecido para una de las categorías de sujetos del impuesto al activo a que hace mención el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, como es la de personas físicas o morales, residentes en México, que otorguen el uso o goce temporal de bienes a otros contribuyentes.

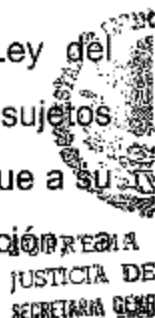
Sobre el particular, es necesario tener en consideración el texto del artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete:

CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDO

**"ARTICULO 1º. Las personas físicas que realicen
"actividades empresariales y las personas morales,
"residentes en México, están obligadas al pago del
"impuesto al activo, por el activo que tengan,
"cualquiera que sea su ubicación. Las residentes
"en el extranjero que tengan un establecimiento
"permanente en el país, están obligadas al pago del
"impuesto por el activo atribuible a dicho
"establecimiento. Las personas distintas a las
"señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o
"goce temporal de bienes, incluso de aquellos
"bienes a que se refiere el Capítulo III del Título IV y
"los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149, de**

**"la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen
 "en la actividad de otro contribuyente de los
 "mencionados en este párrafo, están obligadas al
 "pago del impuesto, únicamente por esos bienes.
 "También están obligados al pago de este
 "impuesto, los residentes en el extranjero por los
 "inventarios que mantengan en el territorio
 "nacional para ser transformados por algún
 "contribuyente de este impuesto.
 "Las empresas que componen el sistema
 "financiero están obligadas al pago del impuesto
 "por su activo no afecto a su intermediación
 "financiera."**

Como es fácil de advertir, el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo establece diversas categorías de sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto al activo, para los que a su vez prevé un sistema o régimen especial de tributación a precisar:



1. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, las que deben pagar el impuesto por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación (párrafo primero del artículo 1º de la ley).

2. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento (párrafo primero del artículo 1º de la ley).



3. Las personas distintas a las señaladas en el mismo párrafo primero, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, en los que también están comprendidos, de acuerdo con la última reforma del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los de aquellos bienes a que se refieren el Capítulo III del Título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en el citado párrafo primero; las que se encuentran obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes (párrafo primero).

4. Los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en el territorio nacional para ser transformados por algún contribuyente de este impuesto, que deberán pagar el tributo sólo en relación con tales inventarios (párrafo segundo del artículo 1º de la ley).



CORTE DE LA NACION

5. Las empresas que componen el sistema financiero, que están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera (párrafo tercero del artículo 1º de la ley).

De lo anterior se desprende que, en virtud de que la Ley del Impuesto al Activo establece diversas categorías de contribuyentes, que enuncia en su artículo 1º, el interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo alguno de los preceptos relacionados con alguna de ellas, deriva de la demostración de que el quejoso se encuentra en la categoría que impugna, pues de esta forma acredita que el sistema relativo le obliga a actuar en determinado sentido y, por ende, que invade su esfera

jurídica, a pesar de que todavía no haya resentido los efectos de una aplicación en su perjuicio. Por consiguiente, basta que la quejosa haya demostrado encontrarse en la categoría de contribuyente a que pertenecen las personas morales con actividades empresariales residentes en México, que deben observar los lineamientos establecidos por el artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, que forman parte integrante del sistema establecido para ese régimen de sujetos obligados, para que se encuentre en condiciones de solicitar el amparo respecto de ese precepto legal.

Sirve de ilustración a las consideraciones vertidas, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número CXL/97, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, correspondiente a diciembre de 1997, página 366, que dice:



**"ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO
 "ESTABLECE CONTIENE DIVERSAS CATEGORIAS
 "DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERES
 "JURIDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE
 "AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONADOS CON
 "ALGUNA DE ELLAS, DERIVA DE LA
 "DEMOSTRACION DE QUE EL QUEJOSO SE
 "ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA.
 "Del texto del artículo 1º de la Ley del Impuesto al
 "Activo vigente a partir del 1º de enero de 1997, se
 "desprende que establece diversas categorías de
 "contribuyentes del impuesto al activo, para los**



CORTE DE
LA NACION.
AL DE ACUERDO:

que a su vez prevé un sistema o régimen especial de tributación, a precisar: 1. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, las que deben pagar el impuesto por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación (párrafo primero); 2. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento (párrafo primero); 3. Las personas distintas a las señaladas en el mismo párrafo primero, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refieren el Capítulo III del Título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en el citado párrafo primero; las que se encuentran obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes (párrafo primero); 4. Los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en el territorio nacional para ser transformados por algún contribuyente de este impuesto, que deberán pagar el tributo sólo en relación con tales inventarios (párrafo segundo); y 5. Las empresas que componen el sistema financiero, que están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera (párrafo tercero). Por

**"consiguiente, para reclamar en el juicio de
"amparo los preceptos que regulan alguno de los
"sistemas específicos previstos por la ley, es
"preciso que el quejoso demuestre que se
"encuentra en la respectiva categoría de
"contribuyente; de no hacerlo, es patente que no se
"actualiza su interés jurídico y, por ende, que la
"acción constitucional es improcedente en
"términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de
"Amparo."**

También resulta de observancia la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, identificada con el número L/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 53, correspondiente a mayo de 1992, página 30, que dice:

SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARIA DE

**"ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO
"ESTABLECE CONTIENE DISPOSICIONES
"RELACIONADAS ENTRE SI, LO QUE DA LUGAR A
"QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS
"SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACION, TENGAN
"INTERES JURIDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA
"DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA
"ESPECIFICO PREVISTO PARA LA CATEGORIA DE
"CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRO TENER.
"Cuando se reclama la inconstitucionalidad de la
"Ley del Impuesto al Activo por considerarla
"autoaplicativa con su sola vigencia, no es
"menester que el gobernado se sitúe dentro de**



cada una de las hipótesis que la misma contempla "en su articulado, sino que basta que se ubique de "manera general en la hipótesis de ser "contribuyente del impuesto que se regula, para "que esté en aptitud legal de combatir cada uno de "los preceptos que puedan serle aplicables según "el régimen específico previsto para la categoría de "contribuyente que demostró tener, toda vez que "por la íntima relación que guardan sus "disposiciones, por ese solo hecho, se encuentra "obligado a acatar el sistema que establece, desde "la iniciación de la vigencia de la ley."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDO

En esa tesitura, cabe señalar que en autos aparece demostrado que la quejosa se ubica en la primera de las precisadas categorías de contribuyentes que señala el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, es decir, la de ser una sociedad mercantil que realiza actividades empresariales y reside en México, según sus propias manifestaciones y los elementos de convicción existentes en autos que sobre el particular informan, en especial, el instrumento número treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco, volumen doscientos dieciséis de la Notaría Pública Número Uno de la Ciudad de México, que contiene el poder general que otorgó el representante legal de la quejosa al promovente del amparo José Luis Fernando Guerrero Córdova, en el que obra dentro del capítulo de declaraciones de que dio constancia el fedatario público, que la empresa denominada Industria Mexicana del Aluminio es una persona moral residente en México, constituida bajo la modalidad de sociedad anónima de capital variable,

dedicada a la actividad empresarial, y que incluso, con ese carácter ha presentado diversas declaraciones de pago del impuesto al activo.

Por tanto, no estando demostrado que la quejosa se encuentre ubicada en la categoría de sujetos del tributo que otorgan el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente, es inconcuso que carece de interés jurídico para impugnar las disposiciones relativas al sistema que rige a esa categoría, como son, entre otras, el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, por lo que la respectiva reclamación constitucional es improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y no es dable el examen de los argumentos relativos.

En las condiciones relatadas, respecto del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo tocante a la categoría de contribuyentes en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

OCTAVO. A continuación, de conformidad con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno debe hacerse cargo de examinar los conceptos de violación vinculados con los artículos 1º (con excepción del párrafo primero en lo relativo a arrendadores no empresarios 2º, 3º y 4º, de la Ley del Impuesto al Activo, aspectos en que resulta procedente el juicio de amparo.



Inicialmente habrán de estudiarse los argumentos en que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, en lo relativo a la tasa para el cálculo del monto del pago del impuesto al activo.

De la demanda de garantías se desprende que, coincidentemente, en el apartado identificado con el inciso c), del primero y tercero de los conceptos de violación, la quejosa aduce que la tasa fija del 1.8% que se aplica a la base del impuesto, en términos del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, es desproporcional e inequitativa, ya que no atiende a la capacidad contributiva de cada contribuyente, siendo lo adecuado para respetar esta capacidad el establecimiento de una tasa progresiva.

CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDO

Tales planteamientos son infundados, ya que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, impone la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el criterio interpretativo que se adopte, en la expresión "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" tiene perfecta cabida no sólo la tasa progresiva, sino también la fija, pues el precepto constitucional en cita no prohíbe la instauración de las tasas fijas, y menos aún consigna que sólo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo. Ello es así, en razón de que el pago de tributos en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilización de tasas progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la

capacidad contributiva de los sujetos en función del objeto gravado.

Tratándose del impuesto al activo, en el considerado precedente ya se expuso que, al establecerlo, el legislador no tomó en cuenta el patrimonio global de los contribuyentes (ni su renta global como sucede en el impuesto sobre la renta), sino sólo una manifestación aislada de su riqueza, como es la tenencia de activos idóneos para producir una utilidad indeterminada, por lo que el establecimiento de una tasa fija o única no viola los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que todos los sujetos deben de tributar en proporción directa a su propia capacidad, es decir, a la particular entidad de la tenencia de sus activos concurrentes a la obtención de utilidades.

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE

Sirven de ilustración a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias sustentadas por este Tribunal Pleno, identificadas con los números 20/90 y 31/97, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, respectivamente en la Octava y Novena Epocas, Tomos VI, Primera Parte y Tomo V correspondiente a mayo de 1997, páginas 43 y 59, que dicen:

La jurisprudencia número 20/90:

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL
"ARTICULO 2º DE LA LEY QUE ESTABLECE LA
"TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 2º**



de la ley que establece dicho tributo publicada en
 el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno
 de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, y
 que determina la tasa fija del dos por ciento para
 el cálculo del monto del impuesto al activo de las
 empresas, cumple con el requisito de
 proporcionalidad tributaria, toda vez que la
 capacidad contributiva de los causantes está en
 relación directa con sus activos. Al establecer
 este tributo, el legislador no tomó en cuenta la
 capacidad contributiva total, como acontece en el
 impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto
 consistente en los activos del contribuyente, en
 mérito de lo cual, la fijación de una tasa única no
 viola el principio de proporcionalidad, ya que cada
 sujeto tributará en proporción directa a su propia
 capacidad."



CORTE DE
 LA NACION.
 SAL DE AGUERO

La jurisprudencia número 31/97:

RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE
 EL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO
 RELATIVO, NO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO
 DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La
 fracción IV del artículo 31 constitucional impone la
 obligación de contribuir al sostenimiento de los
 gastos públicos de la manera proporcional y
 equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual
 fuere el criterio interpretativo que se adopte, en la
 expresión "de la manera proporcional y equitativa

"que dispongan las leyes" tiene perfecta cabida no
 "sólo la tasa progresiva, sino también la
 "proporcional, ya que el precepto constitucional en
 "cita no prohíbe la instauración de las tasas
 "proporcionales, y menos aún consigna que sólo
 "mediante el establecimiento de tasas progresivas
 "se satisfagan los principios tributarios contenidos
 "en el mismo. Ello es así, en razón de que el pago
 "de tributos en proporción a la riqueza gravada, se
 "puede conseguir mediante la utilización de tasas
 "progresivas, pero también con tasas
 "proporcionales, como sucede en el caso del
 "impuesto sobre la renta a cargo de las sociedades
 "mercantiles, pues en la composición legal de la
 "base gravable se tiene en cuenta, como ocurre en
 "el impuesto de que se trata, la distinta aptitud
 "contributiva de la riqueza delimitada por medio de
 "los componentes que determinan el contenido
 "económico del hecho imponible. En tales
 "condiciones, en el impuesto sobre la renta de las
 "sociedades, el respeto a la garantía de
 "proporcionalidad exigida por el artículo 31,
 "fracción IV, constitucional, se consigue en una
 "primera fase, con la determinación de la base
 "gravable del impuesto, a lo cual no conciernen los
 "gastos indispensables de la negociación; y
 "después, con la aplicación de la cuota del 35%
 "sobre esa base gravable que, independientemente
 "de su monto, tendrá siempre la característica de
 "ser producto del capital y no del trabajo. "



SUPREMA
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA GENERAL



Las consideraciones que anteceden ponen de relieve lo infundado de los argumentos de mérito.

NOVENO. En el apartado identificado con el inciso b) del segundo concepto de violación de la demanda de amparo, la quejosa aduce que la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque en ella existe indefinición en cuanto al objeto gravado, por lo siguiente: no se precisa lo que debe considerarse como activo, ni esto puede inferirse de lo dispuesto en las fracciones II y III de su artículo 2º; el artículo 4º señala que se considerarán activos financieros "entre otros", aquéllos que señala, lo que resulta impreciso y provoca incertidumbre; y, que tratándose de los activos consistentes en terrenos, esa fracción determina que para el cálculo de la base gravable, se considerará el monto original de la inversión, pero en términos de lo establecido en los artículos 41, 42 y 44, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los terrenos no se incluyen en el concepto de inversiones, por lo que sobre ellos no es dable calcular el monto original de la inversión.

COORTE DE LA NACION
CÓDIGO DE ACUERDOS

Son infundados esos argumentos, para corroborarlo, es pertinente transcribir lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley del Impuesto al Activo:

"ARTICULO 1º. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan,

"cualquiera que sea su ubicación. Las residentes
 "en el extranjero que tengan un establecimiento
 "permanente en el país, están obligadas al pago del
 "impuesto por el activo atribuible a dicho
 "establecimiento. Las personas distintas a las
 "señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o
 "goce temporal de bienes que se utilicen en la
 "actividad de otro contribuyente de los
 "mencionados en este párrafo, están obligadas al
 "pago del impuesto, únicamente por esos bienes.
 "También están obligados al pago de este
 "impuesto, los residentes en el extranjero por los
 "inventarios que mantengan en el territorio
 "nacional para ser transformados por algún
 "contribuyente de este impuesto.
 "Las empresas que componen el sistema
 "financiero están obligadas al pago del impuesto
 "por su activo no afecto a su intermediación
 "financiera."



SUPREMA C
 JUSTICIA DE L
 SECRETARIA G

"ARTICULO 2º. El contribuyente determinará el
 "impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor
 "de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%.
 "El valor del activo en el ejercicio se calculará
 "sumando los promedios de los activos previstos
 "en este artículo, conforme al siguiente
 "procedimiento:
 "I. Se sumarán los promedios mensuales de los
 "activos financieros, correspondientes a los meses
 "del ejercicio y el resultado se dividirá entre el



"mismo número de meses. Tratándose de acciones, el promedio se calculará considerando el costo comprobado de adquisición de las mismas, actualizado en los términos del artículo 3º de esta ley.

"El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir entre dos la suma del activo al inicio y al final del mes, excepto los correspondientes a operaciones contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, el que se calculará en los mismos términos que prevé el segundo párrafo de la fracción III del artículo 7º-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"II. Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el promedio de cada bien, actualizando en los términos del artículo 3º de esta ley, su saldo pendiente de deducir en el impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio o el monto original de la inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos no deducibles para los efectos de dicho impuesto, aun cuando para estos efectos no se consideren activos fijos. El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual de las inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artículos 41 y 47 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor promedio del mismo se

"determinará dividiendo el resultado antes
"mencionado entre doce y el cociente se
"multiplicará por el número de meses en los que el
"bien se haya utilizado en dichos ejercicios.

"En el caso de activos fijos por los que se hubiera
"optado por efectuar la deducción inmediata a que
"se refiere el artículo 51 de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta, se considerará como saldo por
"deducir, el que hubiera correspondido de no haber
"optado por dicha deducción, en cuyo caso se
"aplicarán los porcentos máximos de deducción
"autorizados en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley
"del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el
"tipo de bien de que se trate.

"III. El monto original de la inversión de cada
"terreno, actualizado en los términos del artículo 3º
"de esta ley, se dividirá entre doce y el cociente se
"multiplicará por el número de meses en que el
"terreno haya sido propiedad del contribuyente en
"el ejercicio por el cual se determina el impuesto.

"Los residentes en el extranjero a que se refiere el
"párrafo segundo del artículo 1º, que mantengan en
"territorio nacional activos de los comprendidos en
"las fracciones II y IV de este artículo por un
"periodo menor a un año, calcularán el impuesto
"correspondiente a los bienes comprendidos en la
"fracción II considerando el resultado de dividir el
"valor que se consigne en el pedimento a que se
"refiere la legislación aduanera disminuido con la
"mitad de la deducción por inversiones que le





hubiera correspondido por el periodo que permanecieron en territorio nacional, de haber sido contribuyentes del impuesto sobre la renta, entre 365 multiplicado por el número de días que permanecieron en el territorio nacional.

Para calcular el valor de los activos señalados en la fracción IV de este artículo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán el valor consignado a la entrada al país de dichos activos, adicionado del valor consignado cuando se retornen al extranjero y dividiendo el resultado entre dos. Este último resultado se dividirá entre 365 y el cociente se multiplicará por el número de días que permanecieron en territorio nacional. Los valores a que se refiere este párrafo serán los consignados en los pedimentos a que se refiere la legislación aduanera.

IV. Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados que el contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y al cierre del ejercicio, valuados conforme al método que tenga implantado, se sumarán y el resultado se dividirá entre dos.

En el caso de que el contribuyente cambie su método de valuación, deberá cumplir con las reglas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 3º. El costo comprobado de adquisición de las acciones que formen parte de

"los activos financieros se actualizará desde el
"mes de adquisición hasta el último mes de la
"primera mitad del ejercicio por el que se determina
"el impuesto.

"Se actualizará el saldo por deducir o el monto
"original de la inversión a que se refiere la fracción
"II del artículo 2º de esta ley, desde el mes en que
"se adquirió cada uno de los bienes, hasta el último
"mes de la primera mitad del ejercicio por el que se
"determina el impuesto. No se llevará a cabo la
"actualización por los que se adquieran con
"posterioridad al último mes de la primera mitad
"del ejercicio por el que se determina el impuesto.

"El monto original de la inversión en los terrenos
"se actualizará desde el mes en que se adquirió o
"se valuó catastralmente en el caso de fincas
"rústicas, hasta el último mes de la primera mitad
"del ejercicio por el que se determina el impuesto.



SUPREMA
CORTA DE JUSTICIA D
LA FEDERACION

"Cuando los inventarios no se actualicen conforme
"a los principios de contabilidad generalmente
"aceptados, éstos se deberán actualizar conforme
"a alguna de las siguientes opciones:

"I. Valuando el inventario final conforme al precio
"de la última compra efectuada en el ejercicio por
"el que se determine el impuesto, o

"II. Valuando el inventario final conforme al valor de
"reposición. El valor de reposición será el precio en
"que incurriría el contribuyente al adquirir o
"producir artículos iguales a los que integran su



"Inventario, en la fecha de terminación del ejercicio de que se trate.

"El valor del inventario al inicio del ejercicio será el que correspondió al inventario final del ejercicio inmediato anterior."

"ARTICULO 4º. Se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes:

"I.- (Se deroga).

"II. Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones emitidas por personas morales residentes en México. Las acciones emitidas por sociedades de inversión de renta fija se considerarán activos financieros.

"III. Las cuentas y documentos por cobrar. No se consideran cuentas por cobrar las que sean a cargo de socios o accionistas residentes en el extranjero, ya sean personas físicas o sociedades.

"No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos a favor de contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar.

"IV. Los intereses devengados a favor, no cobrados.

"Los activos financieros denominados en moneda extranjera, se valuarán al tipo de cambio del primer día de cada mes. Para este efecto, cuando no sea aplicable el tipo controlado de cambio, se estará al tipo de cambio promedio para enajenación con el cual inicien operaciones en el



CORTE DE LA NACION.
JEFES DE ACUERDOS.

**"mercado las instituciones de crédito de la Ciudad
"de México."**

De la anterior transcripción se desprende, en principio, que es inexacto que en la Ley del Impuesto al Activo exista indefinición en cuanto a lo que debe entenderse como activo, ya que, por una parte, su artículo 1º señala, que el objeto del tributo son los activos que se utilicen por los causantes o por terceros, en su caso, en actividades empresariales; y, por otra, que serán considerados como activos, los siguientes:

1. Los activos fijos, gastos y cargos diferidos, de acuerdo con el artículo 2º, fracción II, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo.

2. Los terrenos, según lo establecido por el artículo 2º, fracción III, de la ley en consulta.

3. Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados, de conformidad con el artículo 2º, fracción IV.

4. Los activos financieros, en términos de lo previsto por el transcrito artículo 4º, de la Ley del Impuesto al Activo.

Las precisiones realizadas ponen de manifiesto que la Ley del Impuesto al Activo no deja a inducciones o referencias lo que debe entenderse por activos, sino que lo define en forma clara, por lo que cumple cabalmente con el principio de legalidad





tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

En lo conducente, sirven de apoyo a la consideración vertida, la jurisprudencia número 14/91 y la tesis X/92, sustentadas por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, en los Tomos VII-Marzo y IX-Enero, páginas 38 y 12, cuya sinopsis son las siguientes:

LA JURISPRUDENCIA NUMERO 14/91:



CORTE DE LA NACION
GENERAL DE ACUERDOS

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS. LA LEY RELATIVA
"NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
"PREVISTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, DE
"LA CARTA MAGNA, POR LA CIRCUNSTANCIA DE
"QUE NO COINCIDA CON LA LEY DEL IMPUESTO
"SOBRE LA RENTA EN EL SEÑALAMIENTO DE LO
"QUE CADA UNO DE ESOS ORDENAMIENTOS
"CONCIBE COMO ACTIVOS Y PASIVOS. EI
"principio de legalidad establecido en la fracción IV
"del artículo 31 constitucional debe entenderse en
"el sentido de que la ley que crea un tributo
"contenga los elementos que configuren éste,
"como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la
"época de pago, a fin de evitar que la autoridad
"arbitrariamente establezca tanto la cuantía del
"tributo como los mencionados elementos, dicha
"exigencia constitucional en materia tributaria se
"ve plenamente colmada por la Ley del Impuesto al**

"Activo de las Empresas, toda vez que claramente
 "señala, por una parte, que su objeto serán los
 "activos que se utilicen por los causantes o un
 "tercero, en su caso, en actividades empresariales;
 "y, por otra parte, que serán considerados como
 "tales: 1. Los activos fijos, gastos y cargos
 "diferidos (artículo 2º, fracción II, párrafo 1º). 2. Los
 "terrenos (artículo 2º, fracción III). 3. Los
 "inventarios de materias primas, productos
 "semiterminados o terminados (artículo 2º, fracción
 "IV). 4. Los activos financieros (artículo 4º). Como
 "se ve, en los términos de la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas no hay indefinición en
 "cuanto a lo que debe entenderse por activos, pues
 "claramente los señala en el texto de los artículos
 "invocados, situación que es suficiente para
 "considerar que la misma cumple cabalmente con
 "la exigencia de legalidad tributaria constitucional.
 "Ahora bien, independientemente de que pueda o
 "no haber complementariedad entre la Ley del
 "Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas, el hecho de que no
 "coincidan en el señalamiento de los conceptos
 "que cada una de ellas concibe como activos, no
 "provoca la inconstitucionalidad de la ley
 "reclamada, toda vez que, por un lado, si ésta,
 "como ya se dijo, establece cuáles son los activos
 "que grava, con ello cumple con el requisito de
 "legalidad; y, por otro lado, se trata de dos
 "ordenamientos secundarios autónomos con

SUPLENTE
 JUST. 17A I
 SECRETARIA GE



objeto de tributación diferente, lo que por lógica consecuencia amerita que sus respectivos sistemas se integren con elementos distintos. En tales condiciones, no se requiere de coincidencia plena entre sus disposiciones que consideran a determinados bienes como activos o pasivos, a fin de que se estime que la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas se ajusta al principio de legalidad tributaria consagrado por la fracción IV del artículo 31 constitucional.

LA TESIS NUMERO X/92:



CORTE DE LA NACION
SALA DE ACUERDOS

ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. SI DEFINE EL OBJETO DEL TRIBUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RELACION JURIDICA QUE LOS SUJETOS GUARDEN CON LOS ACTIVOS GRAVADOS. Del texto del artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, en los diversos supuestos de causación que prevé, se desprende que las sociedades mercantiles y personas físicas que realicen actividades empresariales que residan en México, las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, las distintas a las anteriores que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro causante, así como las asociaciones o sociedades civiles que lleven a cabo actividades mercantiles, causarán el

"impuesto por su activo, por el activo atribuible a
 "los establecimientos que tengan en el país
 "quienes residan en el extranjero, o por los bienes
 "dados en arrendamiento. Además de lo anterior,
 "de la ley también se desprende que se gravan los
 "bienes que constituyan activos y que se utilicen
 "en la realización de actividades empresariales,
 "tales como los activos fijos, gastos y cargos
 "diferidos (artículo 2º, fracción II, párrafo primero);
 "los terrenos (artículo 2º, fracción III); los
 "inventarios de materias primas y productos
 "semiterminados o terminados (artículo 2º, fracción
 "IV); y los activos financieros (artículo 4º). Por
 "tanto, en los términos de la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas no hay indefinición en
 "cuanto a lo que debe entenderse por activos, pues
 "claramente los señala en el texto de los artículos
 "invocados, situación que es suficiente para
 "considerar que la misma cumple cabalmente con
 "la exigencia de legalidad tributaria constitucional,
 "sin que sea obstáculo para así considerarlo la
 "circunstancia de que quien lleve a cabo las
 "actividades mercantiles sea propietario o
 "únicamente poseedor de los activos utilizados,
 "dado que esa situación sólo servirá de referencia
 "para determinar el sujeto causante del tributo,
 "pero sin que ello signifique que no se encuentre
 "debidamente precisado el objeto del impuesto
 "reclamado."

SECRETARÍA DE
 JUSTICIA DE
 SECRETARÍA DE



Asimismo, es verdad que en el transcrito artículo 4º de la Ley del Impuesto al Activo, se emplea la frase "entre otros" en relación con los activos financieros, pero esto no entraña violación al principio de legalidad impositiva, pues es patente que tal expresión sólo busca ejemplificar el concepto de que se trata, mas no que con su inclusión en el texto normativo se faculte a la autoridad aplicadora a fijar el objeto imponible; por lo contrario, la voluntad del legislador ya quedó impresa por lo que a ese aspecto se refiere, sin que ello entrañe libertad de la exactora para definir uno de los elementos esenciales del tributo.

Lo anterior se confirma de la lectura de la jurisprudencia número 22/90, consultable en las páginas 37 y 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 35, que prescribe:



CORTE DE
LA NACION
CAL DE ACUERDOS

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL
"ARTICULO 4º DE LA LEY NO VIOLA EL PRINCIPIO
"DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE DEFINE EL
"OBJETO DEL IMPUESTO. El artículo 4º de la Ley
"del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada
"en el Diario Oficial de la Federación del treinta y
"uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
"ocho, al establecer que se consideran activos
"financieros, entre otros, el efectivo en caja, las
"inversiones en títulos de crédito a excepción de
"las acciones, las cuentas y documentos por
"cobrar y los intereses devengados a favor, no
"cobrados, no viola la garantía de legalidad
"tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV,**

"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el concepto de activos financieros tiene una connotación precisa en el lenguaje técnico contable, no desconocido en el sistema tributario mexicano, pues ya ha sido empleado en otras disposiciones legales, como ocurría con el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de mil novecientos ochenta; y el empleo de la locución "entre otros" sólo revela la intención del legislador de anunciar de manera ejemplificativa para orientar a los destinatarios de la ley, algunas especies de activos financieros."

Tocante a que no es posible calcular el monto original de la inversión respecto de los terrenos, porque la Ley del Impuesto sobre la Renta no incluye a éstos como inversiones, planteamiento que se advierte reiterado en el apartado identificado con el inciso d) del segundo concepto de violación de la demanda de garantías, debe precisarse lo siguiente:

De lo dispuesto por el artículo 2º, fracción III, de la Ley del Impuesto al Activo, se desprende que efectivamente hace mención al concepto "monto original de la inversión" al referirse a la determinación del valor sobre el que debe aplicarse la tasa del 1.8%, tratándose de los activos consistentes en terrenos, pero la circunstancia de que ni ese precepto ni ningún otro de esa legislación ni de su reglamento definan lo que debe entenderse por el aludido concepto, no entraña una violación al principio de legalidad tributaria, toda vez que al respecto es aplicable la





definición contenida en el artículo 41, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es así, pues el mencionado párrafo segundo del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala: "El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales."



CORTE DE LA NACION
AL DE ACUERDO

Esta definición además de ilustrativa resulta aplicable, puesto que para determinar el alcance de los términos empleados en determinada disposición legal, en defecto de una acepción propia o particular, no es sólo permisible sino aconsejable acudir a otra disposición que aporte elementos sobre el particular, incluso perteneciente a otro cuerpo normativo de la materia jurídica general, proceder que autoriza la hermenéutica jurídica en pos de clarificar plenamente la aplicación del derecho.

Además, en las condiciones relatadas, la ausencia de definición del concepto "monto original de la inversión" en la Ley del Impuesto al Activo, no revela transgresión alguna al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues siendo el propósito de esta exigencia fundamental, salvaguardar la seguridad jurídica, permitiendo, por un lado, que el contribuyente conozca el alcance de su obligación tributaria y evitando, por

otro, que arbitrariamente la autoridad establezca los elementos esenciales de un tributo, como son el sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa, es inconcuso que se colma con la evidencia de que tales elementos se encuentran establecidos expresamente en ley, aunque sean varias las leyes que participen al respecto, es decir, el principio se cumple aunque los citados elementos no se encuentren previstos en un solo ordenamiento legal, o a pesar de que para arribar a su determinación o acertada acepción se tenga que acudir a diversas legislaciones, pues a través de esto, el legislador cumple con su aludido cometido constitucional y en muchos de los casos simplifica, bajo la técnica legislativa adecuada, la expresión material de las leyes, evitando la definición repetitiva de un mismo concepto en diversos ordenamientos legales.

Las reflexiones expuestas en el párrafo precedente resultan congruentes con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, plasmado en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, en cuanto a que no existe ningún impedimento constitucional para que el legislador determine algunos elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras leyes, porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello demerite su certeza y seguridad jurídica, que es lo perseguido por el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

La aludida jurisprudencia es la identificada con el número 21/90, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI-Primera Parte, página 69, que dice:



CORTE DE
JUSTICIA
FEDERAL DE AGUASCALIENTES

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS
"ARTICULOS 2º, FRACCIONES II Y III, 3º Y 7º
"FRACCION II, DE LA LEY, NO VIOLAN EL
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR
"EFECTUAR REMISIONES A OTRAS LEYES. Esta
"Suprema Corte de Justicia ha sustentado el
"criterio de que no existe ningún impedimento
"constitucional para que el legislador determine
"algunos elementos del tributo que establezca,
"remitiendo a los ya instituidos en otras leyes,
"porque, al hacerlo así, adopta o integra esos
"elementos, sin que por ello demerite la certeza y
"seguridad jurídica de los mismos, que es fin
"perseguido por el principio de legalidad tributaria.
"Por tanto, la particularidad de que los artículos 2º,
"fracciones II y III, 3º y 7º, fracción II, de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas remitan a
"disposiciones de otras leyes para integrar la base
"del tributo de mérito, no transgrede el principio de
"legalidad impositiva que establece el artículo 31,
"fracción IV, de la Constitución."**

Asimismo, de ilustración a las consideraciones vertidas, es pertinente invocar la tesis número XXII/95 del Tribunal Pleno de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 37, cuya sinopsis dice:

**"DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL
 "PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA
 "CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE
 "CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN
 "CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si el
 "principio de legalidad tributaria consiste en que
 "los elementos esenciales de un tributo se
 "consignen expresamente en una ley, se respeta tal
 "principio cuando los elementos esenciales de
 "algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos
 "respectiva, pues el principio de legalidad no exige
 "que tales elementos se consignen en una
 "determinada ley, sino sólo que se establezcan en
 "ley."**

No es obstáculo para estimar satisfecho el principio de legalidad tributaria, que la Ley del Impuesto sobre la Renta, ordenamiento legal al que es necesario hacer remisión para precisar, tratándose de los activos consistentes en terrenos, el concepto de "monto original de la inversión", no incluya a los terrenos en la definición de activos fijos que establece en su artículo 42, ya que esto se explica en función a que el objeto de ese precepto legal es el de regular bienes que se caracterizan por ser susceptibles de depreciación, lo que no acontece con los terrenos cuando constituyen activos fijos, para efectos del impuesto al activo, porque tienden a incrementar su valor conforme transcurre el tiempo.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia que adelante se transcribe, identificada con número 10/91, sustentada



por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Marzo, página 24, la que se invoca con la salvedad consistente en que de las disposiciones legales a que hace mención, sólo el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Activo ha sido reformado, lo que carece de relevancia por las razones antes expuestas, que revelan la actualidad del criterio.

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO A LA
 "LEY RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
 "LEGALIDAD TRIBUTARIA POR INDEFINICION DEL
 "CONCEPTO "MONTOS ORIGINAL DE LA
 "INVERSION" POR LO QUE SE REFIERE A
 "TERRENOS, PUES AL RESPECTO ES APLICABLE
 "LA DEFINICION CONTENIDA EN EL ARTICULO 41
 "DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El
 "principio de legalidad tributaria, contenida en la
 "fracción IV del artículo 31 constitucional, exige
 "que todo impuesto se establezca en una ley en la
 "que se consignen de modo expreso sus elementos
 "esenciales, a fin de evitar que su señalamiento
 "quede al arbitrio de la autoridad exactora. El
 "artículo 10 de la Ley del Impuesto al Activo de las
 "Empresas hace remisión expresa a la Ley del
 "Impuesto sobre la Renta a efecto de establecer la
 "definición, entre otros, del concepto "montos
 "original de la inversión", que de conformidad con
 "la fracción III del artículo 2º de la primera ley
 "mencionada, le es aplicable a los terrenos para la
 "determinación del valor sobre el que deberá

CORTE DE
 LA NACION.
 AL DE ACUERDOS.

*"pagarse el impuesto del 2% que este último
 "dispositivo prevé. Ahora bien, el párrafo segundo
 "del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la
 "Renta define el contenido del concepto de
 "referencia, por lo que por el solo hecho de hacer
 "suya esa definición la Ley del Impuesto al Activo
 "de las Empresas por virtud de la remisión
 "contenida en su artículo 10, tiene precisada la
 "base del gravamen en cuanto a ese tipo de bienes
 "se refiere, cumpliendo en ese aspecto con el
 "principio de legalidad tributaria consagrado por la
 "fracción IV del artículo 31 constitucional. No es
 "óbice para así estimarlo el que el diverso artículo
 "42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se
 "refiera expresamente en su definición de activos
 "fijos a los terrenos, toda vez que ello obedece a
 "que el objeto del precepto es el de regular bienes
 "que se caracterizan por ser susceptibles de
 "depreciación, lo que no sucede con los terrenos
 "cuando constituyen activos fijos, porque tienden a
 "incrementar su valor conforme transcurre el
 "tiempo."*



SUPLENTE
 JUSTICIA DE
 SECRETARÍA GENE

DECIMO. En el apartado identificado con el inciso d) del segundo concepto de violación de la demanda de amparo, la quejosa aduce que se viola la garantía de legalidad tributaria, ya que el procedimiento para el cálculo del impuesto instaurado por los artículos 2º y 3º, de la Ley del Impuesto al Activo, requiere de la aplicación de elementos técnicos con que no cuentan los contribuyentes, como son los factores de actualización



proporcionados por el Banco de México, además de que, al tratarse de inventarios, estos tienen que valuarse conforme a los "principios de contabilidad generalmente aceptados", que no son proporcionados por el Poder Legislativo.

También son infundados tales planteamientos, pues si bien de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2º y 3º, de la Ley del Impuesto al Activo, para determinar el monto del tributo, debe aplicarse al valor del activo en el ejercicio la tasa del 1.8% y respecto del valor de algunos bienes que conforman el activo debe tomarse en cuenta el factor de actualización a que se refiere la fracción II del artículo 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se determina con base en el índice nacional de precios al consumidor, esto no da lugar a considerar que ese procedimiento es confuso o incierto respecto de la base del impuesto y que viola el principio de legalidad.



Tal postura encuentra sustento en que la obtención del índice nacional de precios al consumidor constituye un indicador que refleja las variaciones en el valor de la moneda y su determinación se encomienda a un órgano descentralizado, como es el Banco de México, que realiza una función técnica con el propósito de contar con un mecanismo que permita conocer la magnitud de los cambios económicos derivados del proceso inflacionario.

Además, el índice nacional de precios al consumidor, es un elemento que se determina con base en normas técnicas y no con el fin de fijar el monto de uno o varios impuestos, sin que el Banco de México realice con ello una función legislativa, ni que

quede en sus manos el establecimiento de uno de los elementos esenciales del tributo, ya que este órgano se limita a calcular un elemento que el legislador estimó necesario utilizar para determinar el monto del impuesto, con base en una apreciación real del valor de los bienes y operaciones que se toman como referencia, para conocer la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, además de que se evita la posibilidad de hacer constantes reformas a la ley, para el sólo efecto de hacer los ajustes que imponen las variaciones del poder adquisitivo de la moneda.

En las condiciones relatadas, al remitir la ley al índice citado para determinar el factor de actualización, no se da lugar a la incertidumbre respecto del monto de la base del impuesto al activo, puesto que no se deja en manos de la autoridad exacter su cálculo, ni su establecimiento tiene como única finalidad la de fijar el monto de los impuestos.

Cabe agregar que la exigencia de que se consignen en la ley los elementos necesarios para conocer la medida en que debe contribuirse para los gastos públicos, no se incumple por el hecho de que alguno de ellos sea variable y que, para su determinación, el propio legislador ordene que se atienda a un dato que debe calcularse en forma periódica por un organismo descentralizado especializado.

Es inexacto que el comentado factor de actualización, se encuentre fuera del alcance de los contribuyentes, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, el índice nacional de precios al consumidor



debe ser calculado mensualmente por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que permite su conocimiento por el contribuyente y su consecuente aplicación.

Tampoco provoca incertidumbre alguna para la determinación de la base del tributo que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley del Impuesto al Activo, establezca la posibilidad de que los inventarios se actualicen conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.



CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDO

Se expone tal aserto, pues se advierte que el mencionado artículo 3º de la Ley del Impuesto al Activo hace referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, no como reglas o normas de conducta obligatoria, sino como bases consuetudinarias de una técnica como es la contabilidad que resulta auxiliar en el manejo mismo de las empresas, es decir, como un método de valuación propio de las empresas que aporta resultados uniformes y que permite exámenes de comprobación, de seguimiento aconsejable más no obligatorio, tan es así que el artículo en estudio no prevé una sanción por la falta de actualización de los inventarios conforme a los citados principios, sino otorga otras opciones para efectuar esa actualización, de ahí que no resulta indispensable que esos principios se encuentren precisados en ley, máxime que no es la función de ésta el determinar el contenido y alcance de las técnicas contables, sino el de tomar en cuenta sus resultados para poder determinar la situación fiscal del contribuyente; a lo que debe agregarse que, de cualquier manera, es inconcuso que el conocimiento de esos principios es del dominio público. Por consiguiente, sobre el

particular no se actualiza incertidumbre alguna en relación con la determinación de la base del tributo.

DECIMO PRIMERO. En el cuarto concepto de violación, la quejosa expone diversos planteamientos encaminados a poner de manifiesto que la Ley del Impuesto al Activo viola el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que, dice, el Congreso de la Unión, mediante la creación del impuesto al activo, grava la propiedad inmobiliaria y, por tanto, hizo uso de una facultad impositiva que le corresponde al Poder Legislativo de las entidades federativas.

Los argumentos relativos son infundados, pues el tema de que tratan ya fue examinado por el Pleno de este Alto Tribunal, quien en sesión celebraba el veinticinco de noviembre de novecientos noventa, aprobó el texto de la jurisprudencia 25/90 consultable en las páginas 46 y 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 35, que es del tenor literal siguiente:

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA
"LEY RELATIVA, AL DETERMINAR SU OBJETO, NO
"VIOLA EL ARTICULO 115, FRACCION IV,
"CONSTITUCIONAL. Es cierto que, de conformidad
"con las Reformas Constitucionales del tres de
"febrero de mil novecientos ochenta y tres al
"artículo 115, fracción IV, se estableció que los
"ingresos provenientes de contribuciones que las
"legislaturas estatales impusieran sobre la
"propiedad inmobiliaria serían para los Municipios;**



**pero tal reforma no debe ser llevada al extremo de
"considerar que corresponde al Municipio el cobro
"y administración de las contribuciones que toman
"en cuenta algún aspecto de la propiedad
"inmobiliaria para integrar la base sobre la cual
"deben pagarse (como acontece en el impuesto al
"activo de las empresas) y que, consecuentemente,
"su creación sea facultad exclusiva de las
"legislaturas estatales."**



CORTE
LA NACION
AL DE ACUERDO

No está por demás destacar que definido el objeto del impuesto al activo como la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, es patente que no grava la propiedad inmobiliaria en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República, puesto que la materia de imposición no es la propiedad inmobiliaria, sino un elemento de la actividad empresarial, como lo son las propiedades afectas a tal fin.

Las consideraciones vertidas en los considerandos octavo a décimo primero de este fallo, conducen a la conclusión de que son infundados todos los conceptos de violación aducidos respecto de la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo, lo que conduce a negar al respecto la protección de la Justicia Federal, determinación que debe hacerse extensiva en cuanto al Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo que, ya se dijo, no se impugna por vicios propios.

DECIMO SEGUNDO. Las consideraciones expuestas a lo largo de esta ejecutoria conducen a revocar, en la materia de la

revisión, la sentencia recurrida, decretando el sobreseimiento respecto de los actos vinculados con el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en términos del considerando séptimo de este fallo y tocante de los artículos 5º, párrafo segundo, y 9º de la citada ley; y negar la protección de la Justicia Federal, respecto de los demás actos vinculados con la Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos octavo a décimo primero de esta ejecutoria.

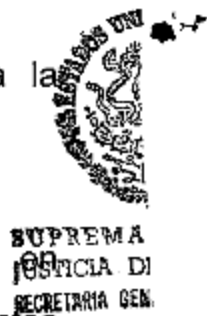
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando séptimo y respecto de los actos vinculados con los artículos 5º, párrafo segundo, y 9º de la Ley del Impuesto al Activo.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa denominada Industria Mexicana del Aluminio, sociedad anónima de capital variable, en contra de los actos vinculados con los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento.

NOTIFIQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.



AMPARO EN REVISION 2205/97



Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin discusión, por unanimidad de once votos se aprobaron los resolutivos primero y tercero; y por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza se aprobó el resolutivo segundo; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel y Presidente Aguinaco Alemán votaron en contra y manifestaron que formularán voto de minoría. Fue ponente el señor Ministro Juan Díaz Romero.



CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDOS

Firman el Presidente, el Ponente y el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

PONENTE:

MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

Esta hoja forma parte del amparo en revisión número 2205/97, promovido por Industria Mexicana del Aluminio, sociedad anónima de capital variable. Fallado el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando séptimo y

respecto de los actos vinculados con los artículos 5º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo. **TERCERO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa denominada Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V., en contra de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley del Impuesto al Activo, y su Reglamento. **Conste.**

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL 13 ENE 1999

El 14 ENE. 1999 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados. Conste



SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA, Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE